

Puentes

ENTRE EL COMERCIO Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Número 2

Volumen XI. Junio 2010

Disponible en Línea

www.ictsd.org/news/puentes
www.cinpe.una.ac.cr/revista_puentes/

Argentina | Bolivia | Brasil | Chile | Colombia | Costa Rica | Cuba | Ecuador | El Salvador | Estados Unidos | Guatemala | Honduras | México | Nicaragua | Panamá | Paraguay | Perú | República Dominicana | Uruguay | Venezuela

El G-20 y las crisis globales

Negociaciones UE y Latinoamérica

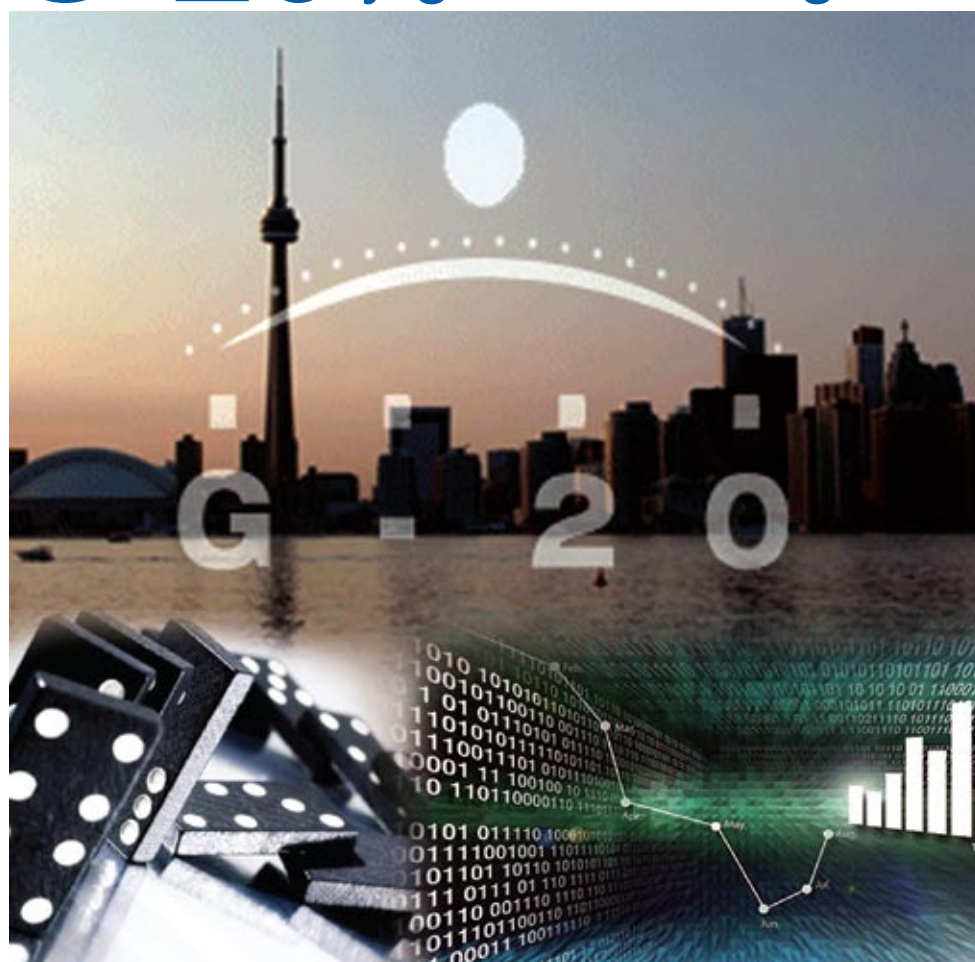
Efectos económicos de los desastres naturales

Indicaciones geográficas y la protección de la biodiversidad

Reformas a la ley chilena de propiedad intelectual

Agenda MIPYMES en Centroamérica

G-20 y gobernanza global



International Centre for Trade
and Sustainable Development



CENTRO INTERNACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE



Puentes tiene como objetivo el reforzar la capacidad de los actores sociales en el área de comercio internacional y desarrollo sostenible, poniendo a su disposición información y análisis relevante para una reflexión más informada sobre estos temas. Además busca crear un espacio de comunicación y de generación de ideas para todos aquellos involucrados en los procesos de formulación de políticas y de negociaciones internacionales.

Puentes es publicada por el Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sostenible (ICTSD), y por el Centro Internacional de Política Económica (CINPE) de la Universidad Nacional de Costa Rica.

Comité Editorial

Perla Buenrostro Rodríguez
Randall Arce Alvarado
Suyen Alonso Ubieta
Maximiliano Chab
Carlos Murillo
Pedro Roffe

Contribuyeron para este número

Suyen Alonso Ubieta
Randall Arce Alvarado
Perla Buenrostro Rodríguez
Gustavo Salas Orozco

ICTSD

Presidente Ejecutivo:
Ricardo Meléndez Ortiz
7, chemin de Balexert
1219, Ginebra, Suiza
Puentes@ictsd.ch
www.ictsd.org

CINPE

Director General:
Gerardo Jiménez Porras
Tel.: (506) 2562-4444 / 2562-4326
Apdo. Postal 2393-3000
Heredia, Costa Rica.
puentes@una.ac.cr
www.cinpe.una.ac.cr

La producción de PUENTES entre el comercio y el desarrollo sostenible ha sido posible gracias al apoyo generoso de todos nuestros donantes.

Para suscribirse gratuitamente, accese a nuestra página de Internet, o escribanos a: puentes@ictsd.ch

Las opiniones expresadas en los artículos firmados en Puentes son responsabilidad exclusiva de los autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de ICTSD, de CINPE, ni de las instituciones que ellos representan.

Estimado Lector,

Poco a poco parece que salimos de la crisis. La apreciación no es definitiva por lo que el G-20 ha llamado a la cautela y a no abandonar los programas de estímulo económico. Con una reflexión de Mercedes Botto sobre el funcionamiento de esta elite de líderes y sus aportes a la gobernanza global, es que abrimos esta segunda edición del año.

Como es sabido, en Puentes damos cobertura a las negociaciones regionales, por lo que dedicar unas páginas a los resultados de los acuerdos comerciales alcanzados entre los países centroamericanos, y Ecuador y Colombia con la Unión Europea, era un análisis imprescindible.

En el escenario internacional muchos han sido los reclamos en contra de China para que reconsidere su política monetaria, y parece que así lo está haciendo. Rodrigo Corrales, estudiante de maestría del CINPE, realiza una recapitulación muy completa de las decisiones que aquel país ha tomado después de la crisis.

Volviendo otra vez la atención a nuestro continente, Puentes consideró oportuno el análisis sobre los efectos de la devaluación que el gobierno de Venezuela decidió implementar a principios de este año. Los resultados podrían ser relevantes para quienes siguen de cerca estos temas.

Los desastres naturales en América Latina causan estragos: humanos, de infraestructura y ciertamente económicos y comerciales. Suyen Alonso y Gustavo Salas, editores de Puentes, han elaborado un artículo donde explican con más detalle las consecuencias de la factura natural que cobran terremotos, sequías e inundaciones.

Páginas más adelante, Carlos Pomareda y Julio Paz hablan sobre la biodiversidad y exploran las oportunidades que en ese sentido representan las indicaciones geográficas para los países andinos.

Las novedades en la ley chilena de propiedad intelectual son presentadas por Daniel Álvarez y Marcela Paiva, expertos en la materia que analizan los cambios que entraron en vigor en mayo pasado con la intención de atender las necesidades de los diferentes interesados.

Finalmente, Ricardo Matarrita aborda una temática que conoce ampliamente por su labor en Centroamérica, que es la conformación de una agenda de políticas y programas para las micro, pequeñas y medianas empresas centroamericanas.

Que disfrute esta edición y esperamos pronto brindarle más análisis sobre comercio y desarrollo sostenible en América Latina.

Atentamente,

El equipo de Puentes

En este número

	Páginas
El G-20 y las crisis globales. Aportes a una nueva gobernanza global. <i>Mercedes Botto</i>	3
Acuerdos América Latina - UE ya son una realidad.	5
Política monetaria de China: resultados post-crisis y eventuales desaciertos. <i>Rodrigo Corrales Mejías</i>	7
Devaluación en Venezuela: efectos sobre el comercio y la integración en América del Sur.	9
Efectos económicos de los desastres naturales: una revisión desde América Latina. <i>Suyen Alonso Ubieta y Gustavo Salas Orozco</i>	11
Indicaciones geográficas y la protección de la biodiversidad en los países andinos. <i>Carlos Pomareda y Julio Paz</i>	13
Reformas a ley chilena de propiedad intelectual: el desafío de una regulación equilibrada. <i>Daniel Álvarez Valenzuela y Marcela Paiva Véliz</i>	15
Prioridades para la definición de la Agenda de Articulación de Políticas y Programas	17
MIPYMES en Centroamérica. <i>Ricardo Matarrita</i>	19
Novedades	19
Calendario y referencias	20

El G-20 y las crisis globales. Aportes a una nueva gobernanza global.

Mercedes Botto*

El objetivo de este artículo es analizar los impactos de G-20 para la gobernanza global. Consideramos al G-20 como arquetipo de la forma en que se construyen las reglas y consensos en el nuevo contexto global. En este contexto de transición, el G-20 introduce dos notas refrescantes en la gobernanza global: a) la inclusión de países en desarrollo en su composición; y b) una agenda que se amplía a través del consenso. Sin embargo, muchos de estos consensos enfrentan serias dificultades para transformarse en acciones concretas.



La iniciativa de conformar el G-20 surge en 1999 en el seno del llamado Grupo de los Siete (G-7) como una estrategia para incluir a las economías en desarrollo en el debate sobre cómo dar solución a los problemas de inestabilidad financiera global, y al mismo tiempo asegurar el avance de la liberalización de las economías.

Inicialmente las reuniones anuales del G-20 estaban compuestas por funcionarios de primera línea del gobierno, representados por los ministros de economía y de finanzas y por los directores de los bancos centrales. No obstante, frente a la última crisis financiera, esta vez no con epicentro en un país emergente sino en la meca del capitalismo, el G-20 dio un vuelco en sus procedimientos, reemplazando las reuniones ministeriales por la convocatoria directa a presidentes y primeros ministros de los países miembros. Con ello, los países del G-20 buscaban dar mayor visibilidad pública y protagonismo mediático a las reuniones y de esta manera dar claras señales de interés y preocupación compartida por resolver la crisis.

La novedad del G-20

El rasgo distintivo del G-20 ha sido desde su origen la membresía, caracterizándose como la primera iniciativa de diálogo de temas vinculados con el sistema financiero internacional entre países de distinto nivel de desarrollo. Los criterios de selección no fueron explícitos; sin embargo, al analizar los países convocados, surgen tres denominadores comunes. En primer lugar, todos ellos pertenecen al grupo de las llamadas economías emergentes, cuyo peso en la economía global ha ido en aumento en los últimos años (a ellos se les atribuye 60% de crecimiento global de los últimos veinte años) llegando a representar en la actualidad más del 30% del PIB mundial. En segundo lugar, lideran los procesos de integración regional en cada uno de los continentes. Por último, cada

uno ha sido víctima de la vulnerabilidad e inestabilidad financiera que acarrea el actual sistema, constituyéndose en los puntos focales de crisis financieras pasadas. De esta manera, la composición del G-20 estuvo inicialmente representada por 19 países: el G-7¹ más Argentina, Australia, Brasil, China, India, Indonesia, República de Corea, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica y Turquía.

Un segundo rasgo que distingue al G-20 de los foros intergubernamentales que agrupan a países de igual nivel de desarrollo es la participación de instituciones y de organismos internacionales en su carácter de órganos técnicos, entre los más importantes el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial del Comercio y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Estos actores no gubernamentales tienen voz pero no tienen veto en las decisiones; no obstante, ejercen una fuerte influencia en las decisiones en virtud del conocimiento técnico y del manejo de información y estadísticas globales.

Una tercera peculiaridad del G-20 es su agenda, que en virtud de su membresía ha ido complementando la agenda del G-7 incluyendo nuevos temas que vinculados con la economía y al desarrollo requieren de una cooperación más amplia entre países. Nos estamos refiriendo a agendas que, como la seguridad energética, el acceso al financiamiento internacional, la migración, sólo se pueden lograr consensos duraderos si se sientan en la misma mesa los países consumidores y los productores de dichos elementos.

Legitimidad y eficacia. Aciertos y pendientes.

El G-20 es un foro *ad hoc* y que a diferencia de las instituciones económicas internacionales no tiene estatus legal. De

allí que su capacidad de influencia global no derive del poder vinculante de sus decisiones (reglas y regulaciones), sino de la credibilidad y la capacidad persuasoria que derivan de su legitimidad y eficacia sobre las acciones, opinión y acciones de la comunidad internacional.

Con respecto a la legitimidad, el hecho de estar compuesto por países desarrollados y las principales potencias emergentes de las economías en desarrollo, en igualdad de condiciones, lo consagró inicialmente como un foro de discusión valorado respecto a los preexistentes. Sin embargo, esta legitimidad de origen se ha visto disminuida en los hechos por la asimetría que separa a los países miembros entre aquellos con capacidad para definir la agenda global, en calidad de países anfitriones de este ejercicio, y aquellos que no tienen los recursos disponibles para hacerlo.

“

... los principales avances del G-20 hasta la fecha no se han plasmado en acciones y coordinación de políticas concretas sino más bien en la cooperación y el intercambio de experiencias entre los gobiernos.

”

En cuanto a la eficacia, los estudios tienden a distinguir entre la efectividad operativa, que se refiere a la efectividad de las prácticas y procedimientos internos para alcanzar sus objetivos; y la efectividad institucional, en la que se evalúan los impactos en términos de la gobernanza global. Con respecto a la primera, las evaluaciones son contrastantes. Para algunos, sobre todo para sus protagonistas, el nivel de efectividad operativa alcanzado

es alto. Los miembros expresan una amplia satisfacción sobre cómo opera el grupo en términos de dirección colectiva (troika), el número de reuniones anuales (no más de tres), así como la presencia de grupos de trabajo. Las opiniones son menos coincidentes en términos del número de participantes a las reuniones y de los tiempos o plazos. Para otros, el G-20 está viciado de malas prácticas procedimentales que contrarrestan sus impactos a nivel global como la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y de participación de actores no estatales.

Con respecto a la eficacia institucional, los principales avances del G-20 hasta la fecha no se han plasmado en acciones y coordinación de políticas concretas sino más bien en la cooperación y el intercambio de experiencias entre los gobiernos. No obstante ello, estos avances han estado en gran medida determinados por el tipo de problemática a enfrentar o agenda.

Los temas más controvertidos – y a su vez más postergados – han sido los vinculados con las políticas monetarias y las formas de regulación privadas de alcance global. A pesar de constituir el tema y la preocupación que le diera origen al grupo, los consensos en torno a las políticas sobre cómo reducir la inestabilidad financiera global en el mediano y largo plazo aún siguen pendientes en la discusión.

La agenda del largo plazo cedió espacio a las soluciones de corto plazo. La mayoría de ellas se vincularon a temas macroeconómicos, como la necesidad de aplicar una tasa de cambio apropiada, de alcanzar una inflación nacional baja y estable, de fortalecer los mercados financieros nacionales, y de dinamizar la economía a través de estímulos fiscales y comercio. En este tipo de políticas de corto y mediano plazo, el nivel de cooperación alcanzado fue intermedio.

Los temas que más evolucionaron fueron los de microeconomía, en su mayoría vinculados a políticas que garantizaran una mayor transparencia e intercambio de información en torno a las reglas de regulación y control bancario. No se trataba de una nueva agenda, sino más bien de la reedición y socialización de una discusión que había tenido lugar en el G-7 y el G-22 con anterioridad, conocidos bajo el nombre de Código de Basilea I y II.

En cuanto a los temas propuestos y de interés para los países en desarrollo (PED) – como los vinculados al desarrollo y a las reformas de las instituciones del Bretton Woods – los progresos fueron escasos y su mayor conquista fue haberlos introducido en la agenda global. Así por ejemplo, los

consensos en torno a las reformas del FMI y del BM se limitaron a la necesidad de introducir cambios en la distribución de cuotas y de hacer más competitivo y meritocrático el nombramiento de sus autoridades máximas. Sin embargo, su concreción (implementación de acciones) sigue aún pendiente.

El balance

En este sentido, el efecto más importante del G-20 ha sido el de erigirse como un foro de intercambio creíble y legítimo, capaz de establecer consensos básicos entre los países desarrollados y los emergentes, en temas donde las instituciones tradicionales, como el FMI y el BM, han fracasado en el intento de hacerlos vinculantes en el pasado. Si bien los mandatos del G-20 no son de carácter vinculantes y respetan la institucionalidad de cada país, los consensos allí alcanzados demuestran tener un fuerte poder de influencia sobre sus miembros y la comunidad internacional en virtud de la legitimidad que deriva de su membresía y de su relevante agenda temática.

Los impactos de esta nueva forma de diálogo para los PED, y más precisamente para América Latina son ambivalentes. Por una parte, la participación de los PED como Argentina, Brasil y México da más credibilidad y visibilidad pública en el ámbito internacional, ampliando su voz e incluyendo sus demandas y visiones sobre la gobernanza global. Por la otra, tiene un costado negativo, que es el del compromiso público de implementar a nivel nacional las agendas consensuadas en el ámbito del G-20, sin avanzar en otras que han sido propuestas por el desarrollo – como la reforma de las instituciones de Bretton Woods – que siguen pendientes de implementación.



...el efecto más importante del G-20 ha sido el de erigirse como un foro de intercambio creíble y legítimo, capaz de establecer consensos básicos entre los países desarrollados y los emergentes, en temas donde las instituciones tradicionales, como el FMI y el BM, han fracasado en el intento de hacerlos vinculantes en el pasado.



Así ocurrió con los códigos y estándares de regulación y control bancario. Estos códigos cubren una vasta cantidad de temas como la transparencia en los datos

y políticas, la supervisión del sector financiero, de las auditorías y/o arreglos insolventes (identificados en los informes sobre la observancia de estándares y códigos, ROSC, por sus siglas en inglés). Muchos de ellos, ya habían sido señalados con anterioridad y formaban parte de las agendas y discursos de los foros e instituciones internacionales, como el FMI y el comité de Basilea; instituciones que habían fracasado en sus intentos de hacerlos vinculantes a través de condicionalidades atadas a los préstamos.

En vista de ello, el gran desafío que se les impone a los PED es alcanzar acuerdos Sur-Sur en algunos temas de interés compartido y de esta manera fortalecer y potenciar su voz en estos diálogos con los países del Norte.

Autora

* Investigadora de carrera del Consejo Nacional de Investigaciones Científica y Técnicas (CONICET) Facultad, Latinoamericana de Ciencias Sociales. Directora del Programa de instituciones económicas internacionales del área de Relaciones Internacionales.
mboetto@flacso.org.ar

Notas

1 El G-7 está constituido por Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Estados Unidos y Japón.

Suscripción gratuita a Revista Puentes

Les recordamos que para suscribirse a la revista Puentes, puede ingresar a <http://ictsd.org/news/puentes/>. Además, si desea recomendar a algún potencial suscriptor de Puentes, puede remitirnos sus datos a las direcciones: puentes@ictsd.ch y puentes@una.ac.cr.

Recordatorio número especial sobre Biodiversidad

En conmemoración del año de la Biodiversidad (ver Revista Puentes, Vol. XI, No. 1, marzo 2010), estamos recibiendo artículos relacionados con el tema para el número especial por publicarse en septiembre de 2010. Para contribuciones, puede escribirnos a: puentes@ictsd.ch

Acuerdos América Latina - UE ya son una realidad

Varios países de América Latina sellaron con la Comunidad Europea negociaciones comerciales con el propósito de impulsar las exportaciones y permitir desarrollar el potencial comercial de la región. La pasada Cumbre de Estados entre las partes fue el marco para la firma de los tratados de libre comercio (TLC) entre la Unión Europea (UE) con Colombia y el Perú, así como del Acuerdo de Asociación (AdA) entre la UE y Centroamérica.

El nuevo estado de las relaciones entre el viejo continente y la región tiene un significado más relevante por cuanto los lazos históricos existentes ahora se unen a un creciente vínculo comercial. En este proceso, los acuerdos suscritos y los que están en proceso de negociación – como lo son de Ecuador, Bolivia y los países miembros del Mercosur (Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Venezuela, cuya aprobación final aún está pendiente en parlamento paraguay –, pretenden potenciar las capacidades productivas de los países de la región, a través de un incremento en los intercambios comerciales con el bloque europeo, para así cumplir con el principal objetivo de mejorar las calidad de vida en nuestra sociedad. De no ser así, se habrá desperdiciado una oportunidad más para disminuir las brechas sociales y la inequidad que desbordan a una de las regiones consideradas más desiguales en el mundo, Latinoamérica. Resulta claro que el verdadero proceso de aprovechamiento de las oportunidades derivadas del tratado comienza a partir de este momento, por lo que el tema de aplicación de los acuerdos comerciales inicia una fase crucial, ya que los TLC o AdA no funcionan automáticamente.

La IV Cumbre de Latinoamérica y la UE pasará a la historia quizás por ser el mayor evento en el que países latinoamericanos hayan logrado simultáneos esfuerzos para acordar una mayor relación comercial y de cooperación. La participación de cerca de 60 jefes de Estado, así como de representantes gubernamentales de los gobiernos, pone de manifiesto el objetivo de profundizar las relaciones entre los dos continentes.

Sin embargo, los países de Centroamérica, así como Colombia y Perú, enfrentarán ahora el proceso de aprobación de los acuerdos alcanzados, punto en el que habría discusión dada la renuencia de algunos empresarios en aceptar el acuerdo y la percepción sustentada de que Europa mantiene subsidios a su sector agroexportador; situación que haría muy difícil la competencia comercial para las empresas latinoamericanas. Pese a esto, durante las negociaciones los gobiernos de los distintos países buscaron proteger los intereses de sectores sensibles como el agrícola, a la vez que tomaron en cuenta la realidad de la industria, logrando que además de la ejecución de distintas

medidas como cuotas o desgravaciones parciales, se establecieran programas para desarrollar la competitividad de la industria.

Impulso a la apertura comercial

El cierre de las negociaciones con los países latinoamericanos fue atropellado dado el deseo de España de firmar los acuerdos en el marco de la Cumbre de Madrid, así como de relanzar las negociaciones comerciales con el bloque de países del Mercosur. La anunciada oposición al acuerdo que han mostrado ciertos sectores empresariales en Colombia da cuenta de ello. Mientras el cierre técnico de las negociaciones con Perú y Colombia se dio en marzo pasado, con los países de la región centroamericana se prolongó hasta el 18 de mayo, durante la reunión celebrada en Madrid.

Sin embargo, pese al sentimiento de que se hubiese podido negociar de mejor manera en algunos frentes, para los negociadores de Europa y Latinoamérica la idea es que los acuerdos impulsen el comercio. En el caso de Colombia, un estudio realizado por el Departamento Nacional de Planeación¹ arrojó que considerando la eliminación de los aranceles de las exportaciones a la UE, el efecto sería marginalmente positivo sobre la economía colombiana, aportando un incremento de 0,46% al PIB, así como un aumento de tan sólo las exportaciones e importaciones en 0,71% y 1,73%, respectivamente.

Cifras dadas a conocer por el Ministerio de Comercio tanto de Perú como de Colombia indican que el porcentaje de partidas desgravadas inmediatamente será superior al 90% de la oferta exportable de cada uno de los países. Para ambos, la UE es el segundo socio comercial detrás de los Estados Unidos (EE.UU.).

Por su parte, para Centroamérica el mercado europeo es muy importante. El intercambio comercial entre los dos bloques regionales pasó de US\$ 7.939 millones a US\$ 12.412 millones entre el año 2000 y el 2009. Si no se tiene en cuenta el 2009, año en que el comercio intrarregional disminuyó un 24,1% a raíz de la crisis internacional, las cifras suministradas por el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica muestran un crecimiento de las exportaciones e importaciones de la región centroamericana del orden de un 6,7% y 7,3% como promedio anual².

La región centroamericana se comprometió a establecer un mecanismo para reembolsar los aranceles aduaneros cuando una mercancía originaria de la UE sea importada a algún país de Centroamérica y luego exportada a otro país centroamericano, dado que aún no ha sido posible lograr un consenso entre los países sobre la constitución de una unión aduanera. Para este proceso, Centroamérica tendrá un plazo de dos años para la puesta en marcha de este mecanismo, pues es un requisito para la entrada en vigencia del acuerdo entre ambas regiones.

En declaraciones dadas por la ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Anabel González, “los intensos días adicionales de negociación que se tuvieron nos depararon un resultado muy bueno”. La representante de la cartera de comercio exterior en sus declaraciones demostraba lo difícil que fue la consecución del acuerdo casi en el desenlace de la Cumbre, pues habían dos temas importantes para la UE que no sólo amenazaron con obstaculizar el cierre con Centroamérica sino con los dos países andinos, en especial Colombia: los derechos humanos y la apertura del sector lácteo. Si bien fue el sector sacrificado en las negociaciones, a opinión de las autoridades gubernamentales de Colombia y Centroamérica, aspectos como las pequeñas cuotas de importación de leche en polvo, importación de tipos de quesos y otros productos lácteos que no se producen en la región, hacen que no representen un gran impacto para la industria del sector.

El acuerdo con Centroamérica supondrá la apertura del 100% del mercado para los productos industriales para ambas partes. Los europeos logran además acceso libre al mercado centroamericano para su industria automovilística durante 10 años, mientras que los aranceles a las exportaciones centroamericanas se reducen. Por su parte, para Colombia y Perú el acuerdo ofrecerá ventajas para la exportación de frutas y verduras, productos pesqueros, automóviles, electrónica y maquinaria, vinos y bebidas alcohólicas.

La “Cláusula Democrática”

Dentro de las críticas más recurrentes a los acuerdos que la UE buscaba alcanzar con Centroamérica, Perú y Colombia, están las concernientes a las preocupaciones en torno a la protección de los derechos

Algunos detalles de los resultados de los acuerdos suscritos por la UE con CA y Colombia

<p>PRODUCTOS CENTROAMERICANOS</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Con exoneración inmediata en el pago de aranceles: camarón, yuca, café, piña, aceite de palma, hortalizas, atún, puré de banano, concentrado de naranja, flores y plantas, textiles y confección. ✓ Exoneración a partir del tercer año: ron embotellado, arroz, entre otros. 5 años de vigencia: jamones y tocinos curados, cueros y pieles de bovino, aleaciones de aluminio gozarían de exoneración total hasta el quinto año. ✓ Exoneración a partir del séptimo año: la carne de cerdo, el tocino, la grasa de cerdo, la leche fluida y los quesos tendrán esos privilegios. ✓ Contingentes para acceso preferencial: carne (9.500 tm), arroz (20.000 tm), azúcar (incluye orgánica) y productos con alto contenido de azúcar (150.000 tm), ron (7.000 hectolitros). ✓ Se excluyeron productos tales como tomate, harina de maíz, harina de trigo, alimentos para aves, entre otros. 	<p>PRODUCTOS EUROPEOS</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Con acceso inmediato libre de aranceles a CA: aceite de oliva, vinos, uvas, manzanas, aceitunas, extracto de malta, básculas, lentes y prismas, entre otros productos. ✓ Al quinto año: leche evaporada y condensada, peras, maquillaje y cosméticos. ✓ Luego de diez años:: queso de pasta azul, maíz dulce, vodka, espárragos, chocolate, cerveza, papa prefrita congelada. ✓ Contingentes que otorgó CA: lactosuero (100 tm regionales), leche en polvo (200 tm para Costa Rica), quesos (317 tm para CR), jamones y tocino (1.800 tm regionales), entre otros. ✓ Se excluyeron de privilegios: carnes (res, pollo, cerdo), leche fluida, mantequilla, yogurt, aceites vegetales, pastas sin huevo, tomate, papa, cebolla, arroz, chicles, confites y snacks.
<p>PRODUCTOS COLOMBIANOS</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se contará con los siguientes contingentes: azúcar (62.000 tm con un crecimiento del 3% anual), productos con azúcar (20.000 tm – 3% incremento anual), carne de bovino (5.600 tm – 10% incremento anual). ✓ Los productos estrella del país andino como son las flores, el café, el aceite de palma, frutas y hortalizas, el tabaco, el etanol y el biodiesel tendrán libre acceso de forma inmediata. 	<p>PRODUCTOS EUROPEOS</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Obtendrá preferencias y mayor acceso al mercado colombiano para lácteos, jamones, licores (whisky, vinos y vodka), entre otros. ✓ Para productos complementarios como aceite de oliva, trigo y cebada, Colombia ofreció acceso libre e inmediato a las exportaciones de la UE. Colombia ofrece la desgravación solamente sobre el componente fijo de la franja de precios en un plazo de 10 años. ✓ Sector lácteo: un contingente de 4000 tm con un incremento anual del 10%. La desgravación total se dará en un lapso de 15 años. ✓ La carne de cerdo, productos avícolas, maíz y arroz fueron excluidos de la negociación.

humanos. Como una manera de calmar a los sectores renuentes hacia el acuerdo, incluida la fuerte presión que ejercen las organizaciones no gubernamentales (ONG) en la opinión pública europea, se incluyó una cláusula de suspensión del acuerdo ante una evidente violación de los derechos humanos por alguna de las partes.

En tal sentido, ya se anticipa una fuerte discusión en el proceso de aprobación de los acuerdos en el Parlamento Europeo. Como argumento de defensa, los representantes comerciales de la UE en su momento indicaron que la llamada cláusula democrática, presente no sólo en estos acuerdos sino en otros suscritos por la UE con Chile y México, permitirá mantener un control sobre la protección y vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos.

La discusión seguramente rondará sobre el tema de la situación que se presentó con el golpe de Estado en Honduras, la violación de derechos humanos en Colombia y el conflicto en la Amazonía peruana. En el caso hondureño aún está pendiente la clarificación de los hechos que ha sido encomendada a una Comisión de la Verdad, instaurada por el presidente Porfirio Lobo, y que se encargará de presentar un informe sobre lo sucedido después del 28 de junio de 2009. Por otra parte, el prolongado conflicto armado colombiano, pese a los logros militares que se han alcanzado se ha visto manchado por los denominados “falsos positivos”, lo que implicó que civiles inocentes fueron asesinados y catalogados como insurgentes por miembros del ejército colombiano. Esta situación, además de preocupante y repudiable, ha encendido las alarmas de distintas ONG europeas defensoras de los derechos humanos, que desde allá plantean una dura discusión del acuerdo comercial con este país sudamericano.

Según se estima, los acuerdos verían finalmente la luz en un plazo de un año y medio dado todo el trámite que deben cumplir en el sistema legislativo tanto de Europa como en los respectivos países latinoamericanos.

Los que faltan

Bolivia y Ecuador junto a los miembros del Mercosur expresaron su deseo de alcanzar un acuerdo económico con el bloque europeo. Tras el difícil inicio de las negociaciones comerciales con la Comunidad Andina (CAN) en 2006, Bolivia y Ecuador decidieron apartarse del proceso, en parte porque para el primero se hacía más necesario un acuerdo a favor del desarrollo que uno comercial, y para el segundo, aún se requería esclarecer la problemática surgida por el arancel que la UE aplicaba al banano.

El escenario cambió, la disputa por el arancel al banano llegó a su fin, y aún cuando era reciente el éxito por la reducción del gravamen sobre la fruta, que será gradual hasta llegar a 114 euros por tonelada en el 2017, los países centroamericanos junto a Colombia y Perú lograron acordar una disminución del arancel a 75 euros por tonelada al 2020. Las reacciones de tal acuerdo no se hicieron esperar por parte del empresariado ecuatoriano, solicitando urgentemente a su presidente Rafael Correa que reanude las negociaciones y equilibre el posible desbalance en privilegios que puedan tener con sus pares colombianos, peruanos y centroamericanos. Y es que el tema va más allá del banano, pues aunque Ecuador es el primer exportador mundial de la fruta, seguido en la región por Colombia y Costa Rica, muchos otros bienes producidos en el país también tendrían que enfrentarse a condiciones desventajosas en sus exportaciones al viejo continente,

entre los que podrían contarse el atún, el cacao y sus subproductos, el café, las flores de exportación y el arroz.

Por su parte, Bolivia, ante el nuevo panorama comercial buscaría un acuerdo con la UE que no se limite al tema comercial. El presidente boliviano Evo Morales, ha expresado que su país negociará de manera bilateral un acuerdo comercial asociativo y complementario con la UE que incluya las premisas de un comercio justo.

Morales fue de los más fuertes críticos al acuerdo comercial de la UE con Colombia y Perú al catalogarlo como perjudicial para el modelo de integración andina. Inclusive el acuerdo rompió con el sentido de la UE de promover los procesos de integración regional, punto que también esgrimen las ONG críticas del acuerdo. Por el contrario, el Ada entre Centroamérica y la UE es mostrado como un modelo ejemplar.

Finalmente, los países miembros del Mercosur también se suman a esta nueva lista de anuncios dando por reanudadas las negociaciones comerciales con la UE, donde los principales avances podrían estar en la resolución de las disputas comerciales internas a raíz de las acusaciones de bloqueos al comercio por parte de Argentina y Brasil, así como el tema de la unión aduanera, eslabón inexistente en el bloque comercial.

Notas

- 1 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (2010). Acuerdo Comercial con la Unión Europea – Principales Resultados. Consultado en: <http://www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/RelacionesComerciales/UnionEuropea/PrincipalesResultadosAbril2010.pdf>
- 2 Intervención de la Ministra de Comercio Exterior de Costa Rica: Importancia del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AACUE). 4 de junio. San José, Costa Rica.

Política monetaria de China: resultados post-crisis y eventuales desaciertos

Rodrigo Corrales Mejías*

China ha sido uno de los principales propulsores de la reactivación económica global. Sin embargo, empiezan a mostrarse efectos contraproducentes en su política monetaria, por lo que comienza poco a poco a retroceder en sus medidas expansivas, con el fin de cerrarle el paso al recalentamiento económico y garantizar un crecimiento a una tasa más sostenida.



A lo largo de los últimos dos años la República Popular de China (RPC) ha mostrado resultados favorables en el manejo de su política económica, sobre todo la monetaria. Mientras la mayoría de las economías del mundo se sumergían en aguas turbias, consecuencia de la crisis económica de 2008 y 2009, el gigante asiático logró alcanzar tasas de crecimiento de alrededor del 9% y un 8,7% para esos años. Esto sin duda marcó un logro sin precedentes ante los ojos del resto del mundo, sobre todo de quienes luchaban arduamente por evitar que sus niveles de producción se acercaran a cifras negativas, signo inevitable de una recesión.

Pese a que el crecimiento económico reportado por China en años anteriores había sido relativamente superior, los resultados durante 2008 y 2009 fueron significativos, no sólo para el crecimiento interno de la nación, sino para la reactivación económica global que tanto se ansiaba. Sólo en el último trimestre del año 2009, China logró un crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB) del 10,7%¹ lo cual le permitió posicionarse como la principal amenaza para relegar a Japón de su puesto como la segunda economía más importante del mundo.

Gran parte del mérito que recibe China por su desempeño reciente, se debe a la decisión del Gobierno de inyectarle a su economía un total de US\$ 585 mil millones² a través de crédito, incremento en la base monetaria y gasto gubernamental. Este fue parte de su plan de estímulo que permitió hacer frente a las complicaciones que acarrea la economía global debido a la crisis; además de recibirse el anuncio de que fue la primera economía que logró recuperarse de dicha situación.

Esta importante inyección de liquidez en su economía fue tan sólo el primer paso en compensación al entorno macroeconómico global del momento, así como el principal detonante de una serie de medidas de política monetaria expansiva, entre las que se encontraban descensos en las tasas de interés para créditos, iniciando con una reducción de 1,08 puntos porcentuales³ a partir de noviembre de 2008, y alcanzando

la cifra de 5,58%, según informa el Banco Popular de China en su sitio electrónico. Además se dio una disminución en el ratio exigido de reservas de los bancos comerciales, ubicándose en niveles entre el 14% y 16% dependiendo de la magnitud de la entidad financiera. Lo anterior con el objetivo esencial de incrementar los niveles de su demanda agregada y producción a través del consumo y la inversión, impulsados principalmente por un mayor acceso al crédito.

Señales de recalentamiento en la economía del gigante

Sin embargo, esta serie de medidas empezarían a dejar una serie de secuelas negativas para la nación asiática. Fuertes señales de crecimiento generalizado en el nivel de precios fue la primera señal de alerta. Incluso, para diciembre del año 2009, el índice de precios al consumidor presentó un crecimiento acumulado de 1,9% respecto de la subida del 0,6% que resultó en noviembre de ese mismo año.

Esta situación alertó no sólo a los diseñadores locales de políticas, sino también al resto de observadores externos, quienes temían que el país que había servido como principal motor de reactivación para la economía mundial estuviese bajo la amenaza de un recalentamiento económico. Una preocupación adicional se dio por la creencia de que la política monetaria china se encontraba alimentando burbujas especulativas en el mercado de bienes raíces y de créditos, pues la inyección de liquidez a la economía generó un incremento del numerario en poder del público y de bancos comerciales, lo que a su vez elevó los precios de activos como las acciones y los bienes raíces. Expertos en el mercado financiero chino, como los economistas de la Corporación Internacional de Capitales de China (CCIC, por sus siglas en inglés), advierten la posibilidad de que gran parte de la liquidez introducida – sobre todo a través del crédito – se haya invertido en proyectos improductivos y préstamos nocivos dado el comportamiento derrochador que ha mostrado China en ocasiones anteriores.

Por tales motivos, las autoridades monetarias chinas han iniciado un plan de contracción frente a estas amenazas por lo que se decidió restablecer el porcentaje inicial de reservas de los bancos comerciales en el Banco Central en aras de frenar de alguna forma el aumento del crédito, y además se restringió la otorgación de los créditos. Como medida complementaria, con la finalidad de recoger parte del circulante en la economía y reducir el consumo, las autoridades monetarias prevén aplicar un aumento leve en la tasa de interés que aún no estipulan en cuanto a su magnitud.

Tales medidas eran previsibles, pues como en todo ciclo económico, se intervinieron sobre las variables macroeconómicas en el momento en que éstas signifiquen algún tropiezo en los resultados de la política económica. No obstante, esta situación se esperaba que sucediera al menos en el mediano plazo y no tan pronto como está ocurriendo en el caso de China, lo que ha llevado a la generación de ciertas dudas sobre la sostenibilidad del acelerado crecimiento que ha venido presentando el gigante asiático.

El yuan en los mercados externos

Muy relacionado con lo anterior, durante años se ha criticado la estabilidad de tipo de cambio del yuan frente al dólar, el cual no había variado desde 2008, manteniéndose a una tasa de 6,83 yuanes por dólar. A diferencia de las otras divisas, el tipo de cambio del yuan es un valor creado por las autoridades y no responde a criterios de libre mercado.

De hecho, esta fijación del tipo de cambio ha originado duras críticas al gobierno de Pekín, especialmente por parte de EE.UU., la Unión Europea (UE) y demás países afectados, ya que comercialmente no pueden competir con las exportaciones chinas. Según Krugman⁴, al mantener fijo el tipo de cambio, la potencia asiática ha llevado a cabo el equivalente a una devaluación para “empobrecer al vecino”. Esto ha dado a los exportadores chinos una ventaja competitiva cada vez mayor frente a sus rivales, especialmente respecto a los productores de otros países.

en vías de desarrollo. En junio de este año, el yuan alcanzó su valor más bajo desde julio de 2005, impulsando así las exportaciones chinas y arrojando superávits comerciales considerables en los últimos meses. No obstante, en el otro lado de la moneda se evidenciaba el deterioro de la relación comercial, así como los empleos de EE.UU., según declaraciones del presidente Barack Obama.

La vieja queja sobre un yuan subvaluado como estrategia para aumentar las exportaciones ha sido objeto de discusión en los principales organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, el gobernador del Banco Central de China, Zhou Xiaochuan, señaló que no existe tal informe. La presión ha ido en aumento e incluso en el Senado estadounidense se ha manejado la propuesta de imponer aranceles extraordinarios a los productos chinos si Pekín no permite que el yuan se revalúe⁵.

A fin de limar "tensiones" y con tono conciliatorio para impulsar una agenda de cooperación mutua, durante los días 24 y 26 de mayo de este año, y por segundo ocasión consecutiva, se llevó a cabo en la ciudad de Pekín el Diálogo Estratégico y Económico China – Estados Unidos, conocido como el G-2. De antesala, dos temas centrales iban a ser tratados en este encuentro: la cotización del yuan y la seguridad internacional; esto debido a la sensible situación que viven las dos Coreas y que inmiscuiría a ambos países del G-2.

Con la finalización de este encuentro y sin acuerdos concretos durante esta actividad, el problema sobre el comportamiento de la moneda china se ha tratado de manera más abierta entre las partes.

Finalmente y gracias a las negociaciones alcanzadas, China decidió reevaluar su moneda el pasado 22 de junio del presente año. A pesar de que el aumento en la moneda china fue mínimo, se prevé será el inicio de un comercio mundial más equilibrado. China posee la capacidad de variar diariamente su moneda al menos un 0,5%⁶. No obstante, no hay interés conocido por parte de las autoridades monetarias de realizar una reevaluación significativa de una vez por todas, sino que el proceso de flexibilización cambiaría se realizará de forma más gradual.

El tipo de cambio se mantendrá dentro de la banda vigente a la actualidad (6,7934 - 6,8616 yuanes por dólar), por lo que será hasta en el mediano y largo plazo que se pueden evaluar los resultados reales de esta medida para la economía interna como para las externas. Entre los primeros resultados que han salido a la luz sobresalen los aumentos suscitados en las últimas semanas por las

bolsas de Brasil, México, Londres y París, las cuales se incrementaron en 0,61%, 0,21%, 0,9% y 1,3% respectivamente. Además, se prevé que la reevaluación del yuan permita a China controlar una de las principales preocupaciones monetarias de los países, el nivel de inflación.

Perspectivas monetarias 2010

En lo que va de 2010, China ha aplicado ya tres aumentos en el ratio de reservas exigidas a los bancos comerciales – el último de 50 puntos base en mayo – como parte de una política monetaria un tanto más laxa que la adoptada en 2008 y 2009. Se advierte además de que serán más cautelosos con el control y manejo de los recursos asignados, por lo que no se prevé que sea una política tan activa como la de los años anteriores, evitando así los indicios de recalentamiento económico. Los niveles actuales de los ratios se encuentran alrededor del 17% para entidades grandes y del 14% para las pequeñas.

El Banco Popular señala en distintas publicaciones su deseo de enfocarse en el crecimiento estable y sostenible de los créditos y la prevención de riesgos monetarios, y es por eso que se ha dedicado a exhortar a las instituciones financieras y monetarias a mejorar el manejo de los créditos, el ritmo al que crecen y el objetivo para los cuales se otorgan. Asimismo, se ha tomado acción en concentrar esfuerzos para optimizar la estructura de créditos para que éstos sean utilizados de manera efectiva en la economía real. Entre estas acciones se encuentra brindar más apoyo a los sectores prioritarios y a los eslabones débiles de la economía velando por que tales préstamos se concedan preferentemente para apoyar proyectos ya iniciados. Los nuevos créditos se manejarán con mayor control y escrutinio sobre sus concesiones, según lo afirma el primer ministro de consejo de Estado, Wen Jiabao en el Informe sobre la Labor del Gobierno que presentado el pasado 5 de marzo⁷.

A pesar de que las medidas de estímulo han sido moderadas para desacelerar el avance de la inflación, los motores del crecimiento chino no han logrado apaciguarse, pues el PBI reportó un crecimiento del 11,9%⁸ en el primer trimestre de 2010; es decir, 5,7 puntos por encima del mismo periodo del año pasado. Aunado a esto, la inflación interanual para el mismo trimestre fue de un 2,2%. Entre las políticas monetarias restrictivas de mayor significancia que se están tomando se encuentran el aumento del coeficiente de caja y el control crediticio, aunque pueden resultar insuficientes para amortiguar los efectos emergentes de la reciente inyección monetaria para enfrentar la crisis.

Por lo pronto, no se han hecho explícitas acciones de política monetaria contractivas adicionales. Por ahora, las autoridades gubernamentales siguen planteando estrategias en su afán de ir introduciendo, sobre todo en las economías emergentes, una mayor participación de su moneda en las relaciones económicas con la finalidad de ir abriendo camino hacia el establecimiento del yuan como una de las tres principales monedas de circulación internacional. Para esto, el Banco Central Chino ha realizado la mayor parte de transacciones financieras y swaps bilaterales cambiarios con países como Corea del Sur, Malasia, Argentina, Indonesia, Bielorrusia y el mismo Hong Kong, con contratos pactados mayoritariamente en yuanes dentro de un periodo de entre tres y cinco años. De ser así, los pagos se deberán hacer necesariamente en yuanes, lo que podría llevar a la moneda a china a ubicarse dentro de las 3 principales divisas a nivel mundial⁹. Consecuentemente, además de querer asegurar un crecimiento mayor pero también más sostenido para este año, China desea establecerse de una vez y de manera definitiva como una de las grandes economías más importantes y de mayor peso a nivel mundial.

Autor

* Estudiante de la Maestría en Política Económica para Centroamérica y el Caribe, Centro Internacional de Política Económica, Universidad Nacional de Costa Rica. rodrigo.corralesm@gmail

Notas

- 1 Fondo Monetario Internacional (2010). Base estadística. Consultado el 18 de mayo del 2010 en <http://www.imf.org/external/np/ds/matrix.htm>.
- 2 Naughton, Barry (2009). La Lucha Para Mantener El Crecimiento. China. Monitor de Liderazgo, No. 27, Instituto Hoover Institution, Universidad Stanford. Consultado el 27 de enero de 2010 en <http://www.hoover.org/publications/clm/issues/37362724.html>.
- 3 Ríos, Xulio (2009). China ante la crisis financiera internacional. Observatorio de la política china; disponible en http://www.politica-china.net/imxd/noticias/doc/1233523193China_ante_la_crisis_financiera_internacional_CEIPAZ.pdf.
- 4 Krugman, Paul. (2009) Mundo desequilibrado. El País. Disponible en http://www.elpais.com/articulo/economia/global/Mundo/desequilibrado/elpepuecone/20091122elpneco_2/Tes.
- 5 El yuan debe ser observado en un contexto amplio y global (2010, 22 de marzo). <http://www.americaeconomia.com/notas/fmi-yuan-debe-ser-observado-en-un-contexto-amplio-y-global>.
- 6 China inició la reevaluación del yuan (2010, 22 de junio). http://www.adnmundo.com/contenidos/economy/china_yuan_revaluacion_moneda_dolar_moneda_china_ec220610.html.
- 7 Tomado de Prensa China en Español: Pueblo En Línea. Consultado el 3 de marzo de 2010 en http://spanish.china.org.cn/specials/lianghui2010/2010-03/17/content_19622834.htm.
- 8 La economía china creció un 11,9% en el primer trimestre (2010, 15 de abril). Diario Expansión, España. Consultado el 3 de marzo en: <http://www.expansion.com/2010/04/15/economia-politica/economia/1271301370.html>.
- 9 China Convierte al Yuan en Divisa Mundial (2009, 15 de junio). Grupo Generación. Consultado el 3 de marzo de 2010 en: <http://www.generacion.com/usuarios/2158/china-convierte-al-yuan-divisa-mundial>.

Devaluación en Venezuela: efectos sobre el comercio y la integración en América del Sur

Desde enero de 2010, la aplicación de un sistema de cambio dual del bolívar fuerte frente al dólar estadounidense, así como los nuevos controles sobre el mercado de divisas — con la recién aprobada Ley sobre ilícitos cambiarios — modificaron nuevamente el panorama económico y comercial de Venezuela. Pero, ¿qué tanto favorece o desacelera el comercio regional la devaluación venezolana?



Diversidad de posiciones convergen en relación al rumbo que la política monetaria adoptada por la Administración Chávez Frías está dando, enfatizando tanto los efectos económicos como la conformación política que esto provoca en América del Sur.

En el presente año y bajo argumentos como incentivar el desarrollo de la industria local venezolana a través de la sustitución de importaciones, mejorar los ingresos estatales, la estabilización cambiaria y reforzar los controles sobre el mercado paralelo, se suscita la aplicación de medidas cambiarias como la devaluación y la ley de control monetario.

Sin embargo, su implementación ocurre en un escenario donde el fenómeno de la estanflación ronda la economía venezolana. Según cifras del Banco Central de Venezuela (BCV) y por cuarto trimestre consecutivo, la economía venezolana sufrió una caída del PIB de un 5,8% correspondiente a estos primeros tres meses del año. La tasa de inflación para el mes de mayo fue de 2,6%, que aunque fue inferior al mes de abril, llevó al índice interanual a un 31,2%. Factores como la restricción temporal de divisa para las importaciones, la disminución del consumo y la inversión, y el plan de ahorro energético explican este comportamiento, según el BCV.

De forma optimista, y por las medidas aplicadas, la autoridades estatales pronostican una inflación para este año de entre un 20% y un 22%, esperando reducir los indicadores de 2008 y 2009 que correspondieron respectivamente a un 30,9% y 25,1%, y colocaron a Venezuela como el país con la inflación más alta de toda Latinoamérica.

La devaluación del bolívar: Promoviendo la 'sustitución de importaciones'

En la historia reciente de la política monetaria venezolana, los años 2003, 2008 y 2010 marcaron claros derroteros.

Como antecedente, en el año 2002 el sistema cambiario en Venezuela se modifica pasando de una estructura de libre flotación del bolívar (Bs), con bandas establecidas, a uno de precio fijo establecido por el Estado. En el año 2003 es cuando se materializa este gran cambio, en un momento en que la nación atravesaba

una severa crisis interna, manifestada en una creciente inestabilidad política y social que trajo consigo efectos negativos en la inversión, el empleo, así como en la seguridad jurídica y cambiaria.

En 2003 el gobierno decide crear en el mes de febrero la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), la cual mediante el decreto de control cambiario es el ente encargado de vigilar el cambio en la compra y venta de divisas extranjeras, y por tanto es el encargado de circular y liquidar las monedas. El funcionamiento de CADIVI derivó en un mayor control en la tenencia de divisas, tanto para personas físicas como jurídicas.

En 2007 se publica en la Gaceta del 6 de marzo la Ley de reconversión monetaria, decreto No. 38638, con la cual a partir del 1° de enero de 2008 entra a regir el bolívar fuerte (Bs.F). Esto implicó el establecimiento de un tipo de cambio de 2,15 Bs.F por dólar, que suplanta los 2150 Bs. por dólar vigentes anteriormente.

La idea detrás de este proceso de reconversión fue contrarrestar la inflación, recuperar el poder adquisitivo de la moneda, mejorar las expectativas económicas de los agentes y fortalecer las macrofinanzas del país. No obstante y pese a la reducción de los dígitos, en el fondo el tipo de cambio del bolívar contra el dólar se ha mantenido fijo desde 2005, y por tanto aspectos como el comportamiento inflacionario de los últimos años y los precios internacionales del crudo no habían sido contemplados en su fijación.

En enero de 2010 es finalmente cuando después de cinco años se decide devaluar el bolívar por medio de dos tipos de cambios, asignado a la canasta básica de CADIVI un tipo de cambio de 2,60 Bs.F por dólar para importaciones prioritarias (alimentos, medicinas, equipos médicos) y 4,30 Bs.F para importaciones no esenciales pertenecientes al sector comercio, automotriz y telecomunicaciones.

Pero, ¿qué implica ello? Para los importadores de productos no prioritarios significara mayores costos, pues por cada dólar se deberán desembolsar más bolívares, ocasionando que el costo de los productos importados a Venezuela también se incremente. En este sentido, Venezuela aplica la doble estrategia

de desincentivar las importaciones para fortalecer la producción e industria local, a la vez que dicho fortalecimiento también genera condiciones iniciales para que otros sectores participen en los mercados externos.

Con este objetivo y a fin de que localmente se vayan creando condiciones para el desarrollo de nuevos sectores, el gobierno implementa el Fondo Bicentenario Socialista con el cual se dará financiamiento a iniciativas de sectores como: textiles y confección, calzados, metalmecánico ligera, química ligera, medicamentos, insumos agrícolas, alimentos y bebidas procesadas entre otros, con miras a promover las exportaciones, reactivar pequeñas y medianas industrias e incorporar a nuevos empresarios. En otras palabras, se promueve una nueva ola de sustitución de importaciones. Al mes de junio, un total de 142 iniciativas contaban con financiamiento que significó para el gobierno una inversión inicial de 765 millones de bolívares¹.

Ante este panorama, se debería esperar una reducción del comercio bilateral con los principales socios comerciales, por cuanto los exportadores a Venezuela competirán con costos más altos y precios locales más bajos, y un crecimiento de la producción interna.

Efectos sobre el comercio regional

El proceso de devaluación también fue acompañado el pasado mes de mayo con la aprobación de la reforma parcial a la Ley sobre ilícitos cambiarios, publicada en el diario oficial la Gaceta No. 5975, con el fin de regular la actividad especuladora del mercado permuta. Estas acciones se dan en momentos en que el dólar paralelo llega incluso a cotizarse por 8,2 Bs.F por dólar, muy distante de los tipos de cambio fijados en enero de este año.

Ambas medidas, tanto la devaluación como la nueva ley de ilícitos cambiarios, tienen impactos diferenciados en el comercio exterior. Con la devaluación y el proceso de sustitución de importaciones en pie, se vería afectaría la comercialización de ciertos productos provenientes de Chile y Colombia, por citar los casos más evidentes.

Por su parte, la reforma a la ley sobre ilícitos cambiarios, al darle potestad a las autoridades

de excluir parcialmente a los intermediarios bursátiles de las operaciones con divisas, dificulta para los empresarios la liquidación de deuda en el extranjero. La utilización de casas de corretaje era una de las salidas que los empresarios adoptaban para liquidar sus deudas en el extranjero debido a los atrasos de CADIVI para asignar y liquidar dólares. De esta forma, éstos acudían a su casa de bolsa para adquirir la divisa que necesitaban, incluso pagando los 8,2 Bs.F por dólar, por vías no oficiales, a fin de cancelar sus deudas con los proveedores.

Con estas consideraciones y a fin de esbozar los efectos sobre el comercio regional de las medidas anteriores, se podrían identificar tres tipos de impactos: a) Países en donde parcialmente se deteriora el intercambio comercial, b) países en donde su balanza comercial con Venezuela no sufre modificaciones y c) países donde se mejora. Sin ser excluyentes, Chile, Colombia y Bolivia ejemplifican cada uno de estos casos.

Sin embargo, debe considerarse que el impacto de la devaluación dependerá del volumen de las exportaciones que se dirijan a Venezuela y de qué porcentaje de éstas correspondan a productos sensibles y a bienes suntuarios, pues así se definirá el tipo de cambio, las liquidaciones y las pérdidas y ganancias.

Con la devaluación del bolívar, la relación comercial Chile – Venezuela en ciertos productos se vería afectada negativamente. Según un informe de la Oficina Comercial de ProChile y considerando los principales productos exportados a Venezuela, un 45% de ellos tendrán derecho al tipo preferencial de 2,6 Bs.F por dólar, en tanto un 51% de los productos restantes deberán utilizar el tipo de cambio llamado “petrolero” de 4,3 bolívares por dólar².

Tomando como base las principales exportaciones chilenas a Venezuela en 2009 y considerando la nueva modificación del listado de productos que tienen acceso a las divisas oficiales, se determinó que de un total de 162 ítems arancelarios, 73 tendrían acceso al tipo de cambio para productos sensibles y 83 al tipo de cambio de 4,30 Bs.F por dólar, entre los que se incluyen productos como vinos, pulpas de frutas, jugos de polvo, entre otros. Además, existen cinco códigos arancelarios que no fueron clasificados en ninguna de las dos listas, como es el caso de las toallas desmaquillantes, insecticidas o papel higiénico, por ejemplo.

Argentina es otro de los países que ya percibe los efectos negativos. Los sectores argentinos más afectados son: el automotriz, manufacturas de hierro, medicinas, aparatos eléctricos y plásticos entre otros, los cuales liquidarán con el tipo de cambio petrolero. Según las autoridades argentinas, la devaluación representará pérdidas cercanas a US \$ 500 millones³.

Con Colombia la situación es muy particular en comparación a los otros países. La confluencia de diferencias políticas han traspasado a la

esfera comercial, por lo que la devaluación del bolívar viene a cerrar un círculo donde ya las relaciones comerciales estaban deterioradas desde hace casi dos años (ver Revista Puentes, Vol. 10, No. 5, noviembre 2009).

De 2008 a 2009 las exportaciones venezolanas a Colombia pasaron de US\$ 1.014 millones dólares a US\$ 605 millones⁴, representando una disminución cercana al 40%. Bajo estas condiciones, el comercio bilateral entre las partes se ha deteriorado, pero no por la devaluación en sí sino por la lejanía comercial que ya se había dado. Asimismo ambas naciones ya han recurrido a la diversificación de sus socios comerciales para suplir la demanda de productos colombianos y venezolanos. Mercados como el chileno, chino, brasileño y canadiense han sustituido paulatinamente las importaciones venezolanas a Colombia. Y en la otra frontera, países del grupo de ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), China, EE.UU. y Brasil han logrado suplir la oferta de productos colombianos.

Para socios como Bolivia, el mercado venezolano es realmente estratégico, especialmente porque éste se ha convertido en uno de los principales destinos para la producción textil boliviana tras la suspensión en junio de 2009 de los beneficios arancelarios que le otorgaba EE.UU. por medio de la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Droga (ATPDEA).

Aún con la incertidumbre que en los primeros meses del año experimentaron los exportadores bolivianos de textiles respecto al tipo de cambio que les iban a aplicar, el resultado fue positivo para ellos. En este sentido, en marzo pasado el gobierno de Chávez decidió aplicar un trato preferencial a todas las exportaciones bolivianas aplicando el tipo de cambio de 2,60 Bs.F por dólar, lo cual se percibe como una clara señal de la importancia de este mercado y las buenas relaciones políticas entre los gobiernos.

Integración regional sí, pero con diversificación comercial hacia afuera

De toda la dinámica vivida en Venezuela, la integración regional efectivamente se promueve pero entre los países aliados. El bloque de países que conforman ALBA son un ejemplo de ello en la medida que se constituyen en socios prioritarios en contraposición a naciones como Colombia, Perú y la misma Argentina que ha recibido impactos comerciales más directos por las decisiones políticas de Venezuela. Sin embargo, en el caso de Argentina, al inicio de las disputas Colombia-Venezuela, el país se vió beneficiado por contingentes arancelarios que se le quitaron a Colombia, lo cual se suma al anuncio de la compra de carne, leche y otros productos.

La devaluación también está implicando un proceso de promoción de exportaciones en nuevos sectores. Esta dinámica en sí buscó la diversificación de socios comerciales, pero no tanto en la región pues la apuesta comercial

ha sido hacia los mercados asiáticos, como China, Singapur y Japón. Muestra de ello es que de los 10 principales países destino de las exportaciones venezolanas, solamente tres pertenecen a América Latina.

Finalmente, todavía es apresurado adelantar otro tipo de conclusiones en relación al efecto que la devaluación del bolívar y otros controles monetarios tendrán en el comercio y la inversión de Venezuela por lo reciente de las medidas. Sólo resta esperar que ambas medidas, como era prometido, sí den resultados positivos para el crecimiento económico del país y el bienestar de su población.

Venezuela en cifras

- Venezuela poseer las reservas de hidrocarburos más grandes del hemisferio occidental. Estas representan aproximadamente la mitad de las reservas de la región y posicionan al país en el quinto lugar en reservas probadas a nivel mundial.

- Más del 90% de las exportaciones venezolanas corresponde a petróleo y sus derivados.

- El otro 10% lo conforman: manufacturas (4%), productos químicos (1%), material de transporte (1%), material eléctrico (0,3%), entre otros.

- Los principales países receptores de las exportaciones petroleras venezolanas para el 2008 fueron: EE.UU (49%), China (4,72%), India (4,37%), Singapur (4,11%) y Cuba (3,82%).

- Sus principales socios regionales son: Ecuador (1,8%), Colombia (1%), Perú (0,26%), Brasil (0,15%), Bolivia (0,06%) y Chile (0,04%) .

- En cuanto al origen de las importaciones, para el 2009, EEUU ocupa el primer lugar al abarcar el 25% de participación, seguido por Brasil (7,3%), China (11%), Colombia (15,4%), México (3,5%), Alemania (3,60%), Argentina (2,40%) y Chile (1,80%) .

- Los principales productos importados son: emisores receptores, medicamentos, carne bovina, leche en polvo, aceite de soya, trigo, bovinos vivos entre otros.

Fuente: Bancoex (2010). Sección de estadísticas.
Disponible en: http://www.bancoex.gob.ve/estadis_gen.asp.

Notas

- 1 Proyectos financiados por Fondo Bicentenario generan más de 6 mil empleos (2010, 8 de junio). *Comunicas.org*. Consultado el 17 de junio en: <http://es.comunicas.org/2010/06/09/proyectos-financiados-por-fondo-bicentenario-generan-mas-de-6-mil-empleos/>
- 2 Venezuela vuelve a modificar listado de productos con acceso a divisas oficiales (2010, 10 de mayo) <http://rc.prochile.cl/noticia/25595/1>
- 3 Devaluación afecta exportaciones de Argentina por unos \$500 millones (2010, enero 12). *El Universal*. Consultado el 7 de junio en http://www.eluniversal.com/2010/01/12/eco_ava_devaluacion-afecta-e_12A3278531.shtml
- 4 Banco de Comercio Exterior de Venezuela (Bancoex). Estadísticas. Disponible en <http://www.bancoex.gov.ve/pdfestadisticas/BALANZA%20COMERCIAL%20VENEZUELA%20-%20COLOMBIA.pdf>. Consultado el 3 de junio de 2010.

Efectos económicos de los desastres naturales: una revisión desde América Latina

Suyen Alonso Ubieta*
Gustavo Salas Orozco*

Los terremotos en Haití y Chile, las sequías e inundaciones en Venezuela, Ecuador y Brasil, el paso de la Tormenta Agatha en suelo centroamericano, así como otros desastres naturales ocurridos durante este año en la región de Latinoamérica y el Caribe, vuelven vulnerables a las actividades socio productivas que el ser humano realiza, con impactos claros en el medio ambiente y la economía.



El continente americano abarca importantes placas tectónicas sobre la cuenca del Océano Pacífico, convirtiéndose así en una zona sísmica y altamente volcánica. Sus montañas, sus diversos climas y su compleja hidrografía hacen que se presenten a menudo inundaciones, deslizamientos de tierra, huracanes, incendios y sequías. Es la posición geográfica de América Latina, en conjunto a los de por sí conocidos efectos del cambio climático, lo que ha ocasionado una región vulnerable a los diferentes episodios producto de los desastres naturales.

Las economías latinoamericanas en general se caracterizan por tener una base económica concentrada en el sector agrícola, pecuario y/o pequeñas o medianas empresas. Tras un desastre natural, el comercio generado por estos sectores enfrenta problemas debido a la necesidad de asumir los costos asociados a reconstrucciones, acciones de adaptación, o simplemente parálisis de la producción. La pérdida de infraestructura, producción y/o cosechas destinadas a la exportación se encuentran dentro de los impactos que deben enfrentar las economías locales ante los embates de la naturaleza.

Terremotos: Impactos diferenciados de un mismo fenómeno

Un fenómeno natural que se presentó en nuestra región en dos lugares pero con impactos y respuestas distintas fue el terremoto. Los eventos telúricos ocurridos en Haití el 12 de enero y en Chile el 27 de febrero, reflejaron las dos caras del continente latinoamericano.

Haití sufrió la devastación de su infraestructura y la muerte de más de 300.000 personas. Esta situación llamó la atención de la comunidad internacional, que

con defensores y detractores, realizó una de las mayores campañas de cooperación y coordinación internacional para atender a los ocho millones de habitantes del país más pobre de Latinoamérica.

En el año 2009 la nación insular se encontraba en una época de estabilización tras el intenso periodo de ciclones del 2008 (Hanna, Ike, Fay y Gustav) y el paso del huracán Dean en el 2007¹. En el 2009, aún en el contexto de crisis internacional, los indicadores económicos de este país mejoraron. La inflación se redujo de 19,8 a 14,4% en comparación al 2008 y la economía creció en un 2% debido al proceso de reactivación de la agricultura².

No obstante ese "relativo" buen desempeño económico, el terremoto de enero de 2009 evidenció una realidad donde los desastres naturales, como factores externos pero sumados a la fragilidad económica y política de ese país, pesan fuertemente en el desarrollo.

Según el recién publicado informe *Plan de acción para la recuperación y el desarrollo de Haití*, el valor total de los daños y pérdidas consecuencia del terremoto se estima en US\$ 7.900 millones, que equivale a poco más del 120% de su PIB en el 2009³. El valor de las pérdidas en activos materiales (vivienda, escuelas, hospitales, edificios, carreteras, puentes, aeropuertos) se calcula en US\$ 4,3 miles de millones, aproximadamente un 55% de los efectos totales del terremoto.

Además de los daños estructurales, otra preocupación que surgió en días posteriores al evento se relaciona con el tema la seguridad alimentaria. Según el Director General de la FAO, Jacques Diouf, después del terremoto la atención se centró – idóneamente – en ayuda alimentaria,

servicios médicos y abrigo; pero al no implementar acciones rápidas en el tema agrícola, la capacidad de autoalimentarse se mantenía en peligro

La principal inquietud de organismos como la FAO es la implementación de un programa de rescate de las necesidades agrícolas inmediatas de Haití, estimado en US\$ 70 millones, y del cual a marzo de 2010 sólo había sido recibido el 17% de los fondos⁴; esto a pesar de que requerían estar disponibles antes de los meses fuertes de siembra, de marzo hasta mayo, período durante el cual se obtiene el 60% de la producción agrícola total de Haití. Se estima que en el sector agrícola las pérdidas son de aproximadamente US \$ 1.000 millones⁵.

En Chile, por el contrario, sólo colapsó una proporción moderada de la infraestructura y la cifra de muertos – aunque lamentable – no fue tan elevada. Para el caso chileno, y en parte porque las acciones de cooperación estaban aún centradas en Haití, el gobierno del país austral no hizo el llamado de la ayuda internacional sino hasta después de varios días de haber ocurrido el terremoto. Esta es una de las más fuertes críticas a la respuesta que se dio tras el terremoto de febrero.

La estimación del monto de reconstrucción asciende aproximadamente a los US\$ 30 mil millones, de los cuales dos tercios se destinarían para la reconstrucción de 500 mil viviendas; US\$ 4.000 millones para la reparación de hospitales; y otros US\$ 6.000 millones para la reconstrucción de carreteras, aeropuertos y puentes. En otros términos, equivaldría a una inversión del 18% del PIB de Chile al 2009.

Por lo demás, el impacto en los proyectos y actividades económicas en Chile fue

evidente. Casos concretos se evidencian en el sector febril y de recursos naturales. Según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE)⁶, como consecuencia del desastre se da una baja en los sectores ligados a los recursos naturales (pesca y forestales), y aquellos ligados a la industria y servicios de educación y propiedad de vivienda. La producción industrial del país descendió un 17,4% durante el mes de marzo respecto al mismo periodo del 2009 debido, principalmente, a los graves daños que sufrieron las industrias de las regiones del Biobío y del Maule, lo que significó la caída más grande reportada en este indicador.

El índice de producción del primer trimestre del 2010 descendió 6,4% debido, en gran parte, a la disminución fabril de marzo y a los efectos del terremoto y maremoto en la capacidad productiva del país. Al bajo ritmo industrial de marzo se suma la merma de los sectores agropecuarios, silvícola y pesca, también afectados por el terremoto, según señaló el INE en su informe.

Meses atrás el Banco Central chileno informaba que el crecimiento económico para el 2010 se reduciría entre un 1% y un 1,5% a raíz del terremoto. Muchos proyectos e inversiones fueron reprogramados o sufrieron demoras. Sin embargo, el último dato de 4,6% en el crecimiento de la actividad económica en el mes de abril vislumbra un mejor desempeño de la economía chilena pese a la catástrofe sufrida.

En particular el repunte chileno estará sustentado por la inversión en infraestructura, la cual en un 71% es de origen privado, y se espera cierre con un aumento de 9,6% frente al año 2009, según informó recientemente la Cámara Chilena de Construcción. Sin embargo, existen varios retos que el gobierno chileno deberá afrontar en el tema de vivienda. La mayoría de países latinoamericanos aplica modelos de subsidios para la adquisición de vivienda, con el fin de impulsar el sector construcción y brindar oportunidades a las familias de ingresos medios y bajos a tener un techo. Este año el gobierno de Chile tiene presupuestado otorgar 65 mil viviendas subsidiadas, de las cuales se habían asignado hasta abril un balance parcial de 13 mil. Además, a raíz del terremoto se creó un subsidio de reconstrucción para 140 mil viviendas, aunque hasta abril sólo se habían

asignado 400. Actualmente el Congreso chileno debate un plan de reconstrucción que incluye medidas para agilizar la aprobación de proyectos y la adjudicación de subsidios.

Prevención y alerta temprana: Los retos para América Latina y el Caribe

La región latinoamericana tiene dentro de sus principales tareas por resolver el poder crear un sistema integral de respuesta a desastres naturales. Si bien los organismos multilaterales destinan recursos para la prevención y atención de desastres, se continúan sufriendo pérdidas económicas importantes en diversos lugares. Esto ya que los recursos gubernamentales son limitados y en realidad existen otras prioridades que los gobiernos latinoamericanos intentan cumplir. El efecto de esto es un costo económico y social mayor en las áreas afectadas por los desastres, que va directamente sobre el presupuesto público de los gobiernos.

La temporada de tormentas tropicales que se avecinan en el Caribe, el derrame de petróleo en el Golfo de México, el creciente aumento en los niveles de las lluvias en la temporada invernal que ya comenzó, son eventos que sobrepasan las capacidades de reacción de los gobiernos y ponen de manifiesto que la cooperación regional en el tema medioambiental es crucial.

Es de resaltar que aunque en la región hay una estructura institucional concerniente al tema de prevención y atención de desastres, como por ejemplo lo son: el Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE), el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPRENAC), la Asistencia Humanitaria del Mercosur (REHU) y la Agencia Caribeña de Gestión de Emergencias por Desastres (CDEMA-CARICOM), organismos que además de plantear estrategias, intercambian información y experiencias, aún hace falta mayor coordinación en esta materia.

Los desastres naturales no son previsibles: no es posible determinar con exactitud cuándo ocurrirá uno de ellos o el impacto que supondrá. Sin embargo, ahora que el planeta se manifiesta, es prioritario impulsar una política regional que esté orientada a la prevención de los mismos y a la creación

de medidas y estrategias que mitiguen los impactos sociales y económicos. De no ser así, la región encontrará importantes obstáculos, sumados a los que sufre actualmente (pobreza, desempleo, inflación, inseguridad, deuda externa).

Aquellos países que adopten la seguridad ambiental y la prevención y respuestas a estos fenómenos como una forma de vida, tendrán mejor posibilidad de reaccionar ante estos fenómenos poco predecibles.

Autores

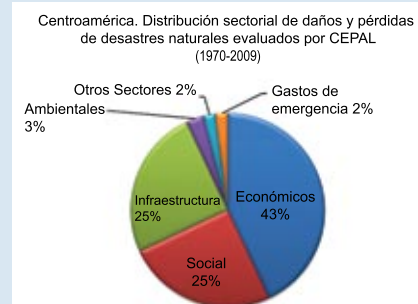
* Editores de las publicaciones Puentes, Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE).

Notas

- 1 CEPAL (2010). Evaluaciones económicas y Sociales de desastres en Haití 2004-2008 (enero de 2010). Disponible en: <http://www.eclac.cl/mexico/noticias/noticias/6/38326/ResumenEvaluacionesHaiti.pdf>
- 2 CEPAL (2010). Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe. Disponible en http://www.eclac.cl/prensa/noticias/comunicados/3/38323/Haiti_2009_factsheetrev.pdf
- 3 CEPAL (2010) Plan de acción para la recuperación y el desarrollo de Haití. Disponible en <http://www.eclac.cl/mexico/>
- 4 Diouf, Jacques (2010). Para evitar un nuevo desastre en Haití. Consultado el 16 de junio en <http://www.irc.fao.org/es/prensa/opinion/art10.htm>
- 5 Agro Haití con pérdidas por US\$1.000 millones (2010, 28 de enero). El Caribe. Consultado el 14 de junio en: http://www.elcaribe.com.do/site/index.php?option=com_content&view=article&id=234936:agro-haiti-con-perdidas-por-us1000-millones&catid=123:dinero&Itemid=142
- 6 Instituto Nacional de Estadísticas (2010). Documento de Trabajo: Ciclos Económicos. Primer trimestre 2009- Primer Trimestre 2010. Disponible en http://www.ine.cl/canales/menu/publicaciones/estudios_y_documentos/pdf/11_06_10/ciclos_econom_abr_10_pag.pdf

¿Sabía usted?

Según la CEPAL, en los últimos 40 años se han presentado en la región centroamericana más de 328 desastres, de los cuales 234 correspondieron a desastres climáticos que tuvieron asociado un costo de US\$ 26.890 millones. En el mismo lapso, el impacto económico por desastres de origen geofísico superó los US\$ 92.000 millones.



Fuente: CEPAL (2010). Unidad de Evaluación Económica y Social de Desastres. Ver: <http://www.eclac.cl/noticias/paginas/4/35494/graficossectores.PNG>

Indicaciones geográficas y la protección de la biodiversidad en los países andinos

Carlos Pomareda* y Julio Paz**

En un esfuerzo por garantizar que los beneficios de los productos comercializables provenientes de la biodiversidad sean desarrollados responsablemente y permanezcan bajo la tutela de sus titulares, los gobiernos de los países andinos podrían hacer uso de varios instrumentos de protección, incluidas las indicaciones geográficas (IG).

Hoy en día hay un creciente interés por añadir valor a las áreas rurales de los países andinos. Ese valor agregado puede ser conseguido a través del uso directo de productos primarios de la biodiversidad, su aplicación como insumos para productos que requieren procesamiento (como por ejemplo, alimentos y bebidas, cosméticos y productos farmacéuticos), la extracción de genes a través de la biotecnología, o bien su uso in situ mediante el ecoturismo. En todos esos casos los productos podrían ir acompañados del conocimiento tradicional, lo cual incrementa su valor.

Valor en áreas rurales

La pobreza en las áreas rurales de los países andinos está rápidamente expandiéndose, y la agricultura tradicional – en el modo en que actualmente se practica – no está generando ni el empleo ni el ingreso adecuados para revertir esta tendencia.

Los países andinos tienen un sector agrícola dual: comercial y campesino. La agricultura comercial depende fuertemente del material genético renovado, incluyendo las semillas híbridas, los altos niveles de insumos agroquímicos y la mecanización. Para algunos cultivos, ciertas granjas relativamente grandes son las dominantes. En el caso de la agricultura campesina, hay una fuerte dependencia de las semillas locales, derivada de la domesticación de la biodiversidad y las prácticas culturales tradicionales. No obstante, aunque el valor nutricional es elevado, la calidad podría no ser la óptima y los vínculos de mercado podrían no estar bien desarrollados. Añadir valor e implementar mejores técnicas de mercadeo sería una contribución significativa a este sector.

Las áreas rurales en la región son ricas en biodiversidad no domesticada, la cual es a menudo explotada a baja escala por comunidades nativas para alimentarse y cubrir sus necesidades médicas. Sin embargo, la extracción de estos recursos por aquellos interesados en patentar esas propiedades sin

un adecuado reconocimiento de los derechos comunales ha motivado en última instancia decisiones políticas orientadas hacia la protección de la biodiversidad.

Signos distintivos

La necesidad de participar competitivamente en los mercados ha llevado a las empresas y a los países a diferenciar sus productos desde lo más general a lo más específico. Así, encontramos marcas generales como “Hecho en Alemania”, y también marcas de distintos tamaños creadas por compañías transnacionales (como Coca Cola, Nestle), o por compañías pequeñas o medianas. De manera similar, las IG han surgido como un medio para diferenciar productos provenientes de regiones específicas.

El principal argumento para usar signos distintivos se basa en tres razones: El primero es para proteger el valor y la identificación de productos locales diferenciados; el segundo es encauzar alianzas entre productores y procesadores para estandarizar sus prácticas de producción y procesamiento; y tercero, es facilitar el acceso a mercados donde los consumidores han demostrado una preferencia por esos productos distintos.

Opciones de identidad

Las opciones más comunes para generar exitosamente una identidad para los productos y los territorios incluyen las IG, las denominaciones de origen (DO) y las marcas colectivas. Las IG en sentido general son un distintivo de los productos que tienen un origen claramente establecido y poseen calidades y una reputación derivadas de su lugar de origen. Éstas no están limitadas a los productos agrícolas pues pueden abarcar artesanías y otros productos.

Se han desarrollado IG para productos de la biodiversidad tanto primarios como procesados. El peso del conocimiento tradicional en las IG es más significativo en los productos procesados y usualmente está asociado con tradiciones

ancestrales. Asimismo en la mayoría de los casos hay un vínculo entre la singularidad de un producto y la biodiversidad. No obstante, el peso final de la biodiversidad depende de la importancia relativa del procesamiento – tradicional o de tecnologías modernas – y el conocimiento local.

Las DO son un tipo especial de IG para productos que tienen una calidad específica única derivada de sus características genéticas, la ecología del sitio, o del procesamiento industrial. Por ejemplo, mientras que una IG puede referirse a Café de Colombia, una DO puede referirse al café de una región en particular de Colombia.

Las marcas también ayudan a diferenciar los productos debido a que otorgan al titular derechos exclusivos de uso. En el caso de las ‘marcas colectivas’, los titulares son una asociación de empresas o productores individuales autorizados para usar esa marca. En algunos casos, una marca local es identificada por sí misma con un territorio, como por ejemplo el caso del Pisco Biondi proveniente del valle de Moquegua, en Perú. En otros, la marca permite la diferenciación de orígenes específicos. Por ejemplo, en el caso de Café Britt de Costa Rica, su etiqueta reconoce varios orígenes, como Tarrazú, Tres Ríos y Los Santos.

Mayores beneficios de las IG

Para beneficiarse de las IG y las DO, los consumidores deben primero reconocer las características especiales de un producto en concreto. Sin esto, dicho posicionamiento de mercado puede ser difícil.

Se les pide a los solicitantes seguir las reglas y reglamentos para obtener la certificación, así como comprometerse a observar dichos criterios durante la vida del proyecto. Para conseguir una IG y una DO, el solicitante debe primero emprender un estudio de las condiciones calificadoras y las perspectivas de mercado, presentar un registro, y luego seguir todos los pasos hasta lograr el derecho de uso. Si un

grupo de productores y procesadores están aliados, deben ser acreditados y comprometerse a implementar un programa de inversión, emplear una estrategia de administración que garantice la calidad de los productos bajo estándares establecidos y obtener acceso a mercado.

La experiencia andina en IG y DO

Las potenciales IG y DO para los países andinos son significativas. Cientos de productos – tanto en ambientes domesticados como naturales – son posibles candidatos para esos instrumentos. No obstante, en el caso de Perú, de esa larga lista sólo unos 23 productos han sido reconocidos y únicamente seis se han registrado; otros cuatro actualmente están en proceso.

La capacidad institucional en los países andinos para lidiar con las oportunidades de IG y DO es limitada y existe una falta de estrategia a nivel nacional para promover y apoyar en particular las IG. Dentro de las instituciones competentes en materia de DPI y asuntos relacionados hay muy pocos funcionarios encargados de IG, mientras que en los ministerios de agricultura hay una completa ausencia de ese tipo de funciones. En el ámbito local, dicha capacidad es casi inexistente.

La experiencia europea muestra que el cumplimiento de la legislación y la capacidad de las organizaciones locales es esencial como medio efectivo de protección contra la imitación y el fraude. Sin embargo, el reconocimiento de estos asuntos en la OMC sigue siendo objeto de debate.

Lecciones de la experiencia andina

Las lecciones que se presentan a continuación son resultado del análisis de cuatro productos en particular. En algunos de ellos, como Café de Colombia, la producción tiene lugar en una amplia área geográfica, mientras que en otros, como Maíz Blanco del Cuzco, la producción ocurre en una zona más localizada. Definir el origen de un producto puede ser complicado en algunos casos cuando los bienes son originados en más de un país, como sucede con la quinoa, que se fabrica en Perú y Bolivia, e incluso en los Estados Unidos. Por lo tanto, deben emprenderse esfuerzos para asegurarse de que las DO sean definidas tan específicamente como sea posible respecto a los territorios.

No obstante, al observar los factores genéticos en algunos de estos casos, se hace evidente que los supuestos pueden ser diferentes. Por ejemplo, el Maíz Blanco del Cuzco es muy específico, pero la quinoa tiene algunas variedades; es por eso que las características genéticas debe obtener un importante reconocimiento como elemento de las DO.

El procesamiento es quizás el elemento más relevante para determinar una DO, particularmente cuando se deriva de tradiciones ancestrales, lo que no siempre es el caso de las DO en los países andinos. Café de Colombia por ejemplo, es procesado bajo reglas industriales para asegurar la calidad. Cacao Arriba del Ecuador y la quinoa de Perú y Bolivia no son procesados por métodos tradicionales, mientras que el Maíz Blanco del Cuzco no es procesado del todo.

IG y biodiversidad

La biodiversidad como tal, particularmente in situ, debe ser protegida por los gobiernos y la sociedad para asegurar la conservación del ecosistema, para facilitar los medios de vida de las poblaciones nativas mientras éstas aprenden a usar la biodiversidad para crear nuevos productos, y para encauzar el trabajo científico que conduzca a nuevos productos de la industria de la biotecnología. Los medios de protección de la biodiversidad in situ incluyen la declaración y la vigilancia de las reservas naturales, el fortalecimiento de la investigación en esa materia, y el empoderamiento de las poblaciones locales.

Respecto a la protección de los productos de la biodiversidad en territorios específicos, los DPI y las IG tienen un ámbito limitado. En el primer caso, esa protección es ofrecida a través de las patentes. Sin embargo, aunque las patentes deben ser compartidas con las comunidades locales para su efectividad en cuanto a la protección, es bien sabido que eso no sucede.

No obstante su capacidad de protección, las IG no van más allá de salvaguardar el origen geográfico y las calidades que lo acompañan. Dicho instrumento tiene un uso muy limitado en la protección del conocimiento tradicional que frecuentemente es asociado con los productos de la biodiversidad.

Las marcas identificadas con características territoriales y calidades específicas del producto puede ser una opción para brindar cierta protección. También tienen la ventaja de ser más viables que las IG. Sin embargo, al menos en el caso de Perú, los 23 productos identificados con posibilidades de obtener IG hoy en día son usados por 43 empresas para producir varios cientos de productos. Algunos de los productos originales son utilizados por unas 13 compañías pero sin el reconocimiento de ningún tipo para los productores locales.

Conclusiones

El desarrollo rural de los países andinos puede ser mejorado a través de la generación de valor agregado, y las IG son un posible medio hacia ese fin. Los signos distintivos son creados para aquellos productos que se derivan únicamente

de la biodiversidad y para aquellos que obtienen un valor agregado a través del procesamiento, principalmente cuando ese proceso tiene su base en tradiciones ancestrales. Dichos signos distintivos ofrecen un posible vehículo para proteger a productos únicos y a territorios de la imitación y el fraude respecto a su origen; pero a la vez ofrecen poca protección para el conocimiento tradicional que acompaña a esos productos.

A pesar de la proliferación de referencias a cientos de productos con probabilidades de adquirir IG, el número de productos con las calificaciones necesarias es reducido, y el número de productos que finalmente ha logrado el estatus de IG es extremadamente limitado. Aunque hay expectativas de que los DPI y las IG brindarán protección contra la copia, imitación y fraude, su efectividad es limitada por la naturaleza de los productos y las condiciones en los territorios locales y la debilidad de sus reglamentos y capacidad institucional para su aplicación. Por lo tanto, se requiere que varios instrumentos protejan los productos locales de la biodiversidad – tanto primarios como procesados – para permitir que los beneficios sean retenidos por las comunidades locales y los productores y procesadores comprometidos.

Recomendaciones

La capacidad en las instituciones nacionales competentes debe impulsarse para permitir la aplicación efectiva de la legislación de IG y promover su establecimiento en los casos con posibilidades reales. El acceso a la información en cuanto a los beneficios, las oportunidades, los compromisos necesarios, y la inversión y los requerimientos de gestión para las IG para encaminarlos a un negocio exitoso deben ser mejorados para asegurar que los miembros de la sociedad civil puedan participar efectivamente en el proceso. La asistencia técnica a las organizaciones de productores locales con posibilidades de conseguir IG para los productos antes mencionados también debe ser incrementada cuando se hayan identificado oportunidades reales.

Autores

* Presidente de Servicios Internacionales para el Desarrollo Empresarial (SIDE S.A.). sidesa@racsa.co.cr.

** Director del Centro de Estudios Estratégicos del Instituto Peruano de Acción Empresarial (IPAE). julio.paz@terra.com.pe

Reformas a la ley chilena de propiedad intelectual: el desafío de una regulación equilibrada

Daniel Álvarez Valenzuela*
Marcela Paiva Véliz**

El pasado 4 de mayo entró en vigencia en Chile la más importante reforma a la ley de propiedad intelectual de los últimos 40 años. Esta iniciativa del gobierno de Michelle Bachelet tuvo por objeto modernizar la regulación vigente, incorporar diversas obligaciones internacionales e intentar subsanar una deficiencia histórica: contar con una legislación que equilibrara adecuadamente los legítimos intereses de autores, titulares y la ciudadanía en general¹.



Hasta esa fecha, la Ley de 1970 y cada una de sus modificaciones posteriores se caracterizaron por considerar únicamente los intereses de los titulares de derechos de autor, estableciendo nuevos derechos para éstos y omitiendo casi por completo los intereses de usuarios y consumidores de obras protegidas. Este enfoque se vio reforzado por los tratados de libre comercio suscritos en los últimos años, que se tradujeron en la necesidad de reformar nuestro sistema en aras de mejorar y reforzar la observancia de los derechos de autor.

De esta forma y por primera vez en la historia, junto con otorgarse mayores herramientas para el combate de la piratería y promover el respeto de los derechos de autor, se contempla un apropiado catálogo de excepciones y limitaciones a estos derechos, que son el objeto de este artículo.

Las reformas fueron diseñadas pensando en la diversidad de actores e intereses involucrados y fueron largamente discutidas en el Congreso Nacional durante más de tres años. La ley recibió importantes apoyos de organizaciones representativas de usuarios y consumidores y fuertes críticas provenientes principalmente de ciertos sectores de creadores y representantes nacionales de industrias creativas internacionales. Sin perjuicio de que estos sectores valoraron la introducción de mejoras en los sistemas de observancia, se manifestaron fuertemente contrarios al fortalecimiento del catálogo de excepciones y limitaciones.

Esta discusión dio origen a una serie de movimientos ciudadanos que manifestaron sus diversas posiciones durante la discusión legislativa, transformando un asunto que solía interesar únicamente a ciertos autores e industrias creativas, en una preocupación ciudadana, cuyas voces se hicieron oír a través de diversos medios, incluyendo plataformas electrónicas como Facebook y Twitter.

Los cambios en resumen

En aras de una protección más eficiente y eficaz de los derechos de autores e industrias

creativas, se aumentaron significativamente las sanciones civiles y penales en casos de infracción, se mejoraron los procedimientos judiciales y se estableció un régimen simplificado de indemnizaciones económicas, cumpliendo así un viejo anhelo de titulares de derechos. En similar sentido e implementando la obligación adquirida en el Tratado de Libre Comercio suscrito entre los gobiernos de Chile y Estados Unidos (EE.UU), se incorporó en la ley un régimen de limitación de responsabilidad civil de los prestadores de servicios de Internet. De esta manera se crea un procedimiento judicial simplificado de retiro y bloqueo de contenidos ilegales de Internet que permitirá obtener de forma expedita una orden judicial para esos. En este ámbito, el Congreso Nacional rechazó cualquier disposición que no siempre contemplara la intervención de un juez por considerar que se podían afectar gravemente diversas garantías amparadas por la Constitución Política.

Para cumplir con el objetivo de equilibrar la legislación vigente, se establecieron un conjunto de medidas, tradicionalmente denominadas excepciones al derecho de autor, que garantizarán el acceso legal de la ciudadanía a obras protegidas en cada una de las hipótesis contempladas. El nuevo catálogo de excepciones fue elaborado teniendo especialmente presente la abundante experiencia internacional y los principios contenidos en diversos tratados internacionales multilaterales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Con esta decisión de políticas públicas, Chile pasará a contar con un listado apropiado de casos en los que no se requerirá de autorización ni pago al titular de los derechos para utilizar legalmente una obra, entre los cuales podemos destacar las siguientes:

- **Derecho de cita:** Se amplió el alcance de la excepción existente, tradicionalmente limitada a la reproducción de fragmentos en obras culturales, científicas o didácticas, incorporándose como usos autorizados la inclusión de fragmentos breves de obras

protegidas, a título de cita, o con fines de crítica, ilustración, enseñanza e investigación;

- **Discapacitados:** Se incorporó una amplia excepción que permitirá la reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público de una obra en beneficio de discapacitados visuales, auditivos o de cualquier otra clase de discapacidad que impida el normal acceso a una obra. Así entonces se subsana una deficiencia histórica de la legislación anterior, constituyendo además un avance significativo en el ejercicio del derecho a la igualdad de este importante segmento de la población nacional;

- **Bibliotecas y archivos sin fines de lucro:** Se agregaron un conjunto de excepciones que benefician el trabajo de estas entidades fundamentales en la transmisión y conservación del acervo cultural y científico del país. Entre los casos considerados se autorizó: 1) la reproducción íntegra de obras que no se encuentren disponibles en el mercado (out of market exception); 2) la reproducción para fines de conservación en caso de pérdida, deterioro o destrucción de una obra original; 3) la reproducción parcial de obras para uso privado de los usuarios de dichas instituciones; 4) la reproducción electrónica para uso en sala; 5) la traducción de obras completas para su uso en la biblioteca o archivos; entre otras;

- **Fines educacionales:** Se autorizó la reproducción y traducción para fines educacionales de pequeños fragmentos de obras de distinta naturaleza para la ilustración de actividades educativas, así como la ejecución y comunicación pública de obras en ese tipo de establecimientos;

- **Programas computacionales:** Retomando la experiencia internacional y haciéndose cargo de la necesidad de establecer incentivos y facilitar el desarrollo de tecnologías locales, se establecieron excepciones relativas a programas computacionales. La primera de ellas permitirá llevar a cabo actividades de ingeniería inversa para lograr la compatibilidad operativa entre programas o para fines de investigación y desarrollo. La segunda autoriza

la adaptación o copia de un programa cuando sea esencial para su uso o respaldo. Por último, se autorizaron las actividades que se realicen sobre un programa computacional con el único propósito de probar, investigar o corregir su funcionamiento o seguridad:

- **Copias temporales:** Junto con reconocer el derecho de los titulares sobre la reproducción temporal de sus obras, se autorizó expresamente la reproducción provisional cuando ello sea necesario para su transmisión o uso lícito. Así, las múltiples copias temporales de una obra que se deben hacer para transmitir un contenido a través de Internet o de satélite, quedarán cubiertas por esta norma.

- **Sátira o parodia:** Se protege la sátira o parodia que artísticamente se distinga de la obra, interpretación o caracterización original.

- **Uso privado:** Se permite la comunicación o ejecución pública de una obra en el núcleo familiar así como su traducción para uso personal.

- **Usos administrativos:** Incorporando las flexibilidades que contempla el Convenio de Berna, se autoriza la reproducción y comunicación al público una obra para la realización de actuaciones judiciales, administrativas y legislativas.

- **Usos justos:** Un avance significativo constituyó la inclusión de una excepción amplia que permite realizar usos incidentales de obras protegidas con propósito de crítica, comentario, caricatura, enseñanza, interés académico o investigación. A partir de esta norma, esperamos que se configure un marco de flexibilidades acorde con el avance tecnológico y que marque el camino que debiera seguirse en materia de derecho de autor.

“

Consideramos que es posible y deseable que los países en vías de desarrollo cuenten con excepciones de usos justos. Nuestros sistemas normativos permiten otorgarle esa potestad a un juez, generando un marco regulatorio dinámico que puede evolucionar al ritmo de la sociedad y el cambio tecnológico.

”

Como se puede apreciar, el resultado obtenido luego de la intensa discusión legislativa es positivo. El Congreso Nacional comprendió, e incluso profundizó en algunos casos, la premisa que tuvo en su momento el gobierno de Chile: el

derecho de autor no se construye únicamente con los derechos de creadores y titulares sobre sus obras. Debe considerar también el derecho de acceso y libre utilización de las mismas por parte de la ciudadanía.

Esta concepción dinámica de los derechos de autor posibilita, por ejemplo, que nuevas creaciones artísticas y culturales tengan lugar en incontables oportunidades. Las obras existentes sirven de inspiración o fundamento para el desarrollo de nuevas obras. Mickey Mouse es un ejemplo de ello, así como las técnicas del collage en las artes visuales, match-up y remixes en música, siendo esta una cualidad del proceso creativo humano que resulta fundamental preservar y promover. Asimismo, importantes desarrollos tecnológicos en materia de software son posibles gracias a las autorizaciones de uso y estudio de su código fuente a través de las técnicas de ingeniería inversa, que permiten la mejora y evolución de las soluciones informáticas. Del mismo modo esta concepción permite que usos tan obvios y necesarios como llevar un libro a un formato audible para que pueda ser utilizado por una persona con discapacidad visual, sean posibles de realizar legalmente. Para éstos y otros usos, las excepciones y limitaciones son elementos esenciales. Sin embargo, este sólo es un paso.

Es posible constatar en el ámbito internacional que los niveles de protección de los derechos de autor son cada vez más homogéneos a través de la suscripción de acuerdos internacionales multilaterales, regionales y bilaterales que han diluido las tradicionales diferencias existentes entre las normas de copyright propias del derecho anglosajón y las normas de derecho de autor de raíz europea continental. Así, se han armonizado los plazos de protección y medidas como la limitación de responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet, entre otras. Por lo tanto, ahora resulta necesario hacer lo propio con las normas nacionales e internacionales sobre excepciones y limitaciones al derecho de autor, reconociendo el impacto de los sistemas de protección en el ámbito de los derechos humanos.

Normas de usos justos

Hoy en día creemos que es fundamental incorporar – en las legislaciones locales y en los instrumentos internacionales – excepciones más flexibles, como las denominadas excepciones de usos justos, propias del sistema anglosajón, que permiten al juez la determinación de múltiples hipótesis diversas sin necesidad de un catálogo que las detalle.

El proyecto de ley originalmente presentado por el Gobierno de Chile incluyó una excepción de esta naturaleza, que entregaba a un juez la definición de nuevas excepciones, norma que tras un arduo debate y negociación en el

Congreso Nacional se transformó en un germen de usos justos en los términos ya descritos. En incontables oportunidades durante la discusión, algunos representantes de titulares de derechos manifestaron una férrea oposición a su incorporación, argumentando que en un sistema de derecho continental como el chileno, una norma de esta naturaleza no era viable y provocaría en la práctica la desprotección de los derechos de sus representados.

Consideramos que es posible y deseable que los países en vías de desarrollo cuenten con excepciones de usos justos. Nuestros sistemas normativos permiten otorgarle esa potestad a un juez, generando un marco regulatorio dinámico que puede evolucionar al ritmo de la sociedad y el cambio tecnológico. Por otro lado, este tipo de normas no son ajenas a nuestro sistema. La obligatoriedad de otorgar una licencia de patente inventiva, que define el juez en base a ciertos criterios, es una muestra de ello. Cabe agregar que Chile, así como otros países, ya ha incorporado en su legislación interna otras disposiciones propias del sistema de copyright sin inconveniente jurídico ni práctico. Finalmente, de una revisión no muy profunda sobre la situación comparada en esta materia, es posible constatar que quienes cuentan con sistemas de excepciones más robustos, incluyendo normas de usos justos, son precisamente los países más desarrollados, situación que no se condice con las necesarias flexibilidades que los países menos aventajados requieren para lograr un desarrollo mínimamente equitativo.

Las excepciones, y principalmente los usos justos, son fundamentales para el aprendizaje, el incentivo del proceso creativo y la evolución de las ciencias y las artes de la humanidad. Esperamos que este paso adelante tras años de trabajo, permita a otros países beneficiarse de nuestra experiencia y mejorar globalmente las fórmulas legales para resguardar los derechos de creadores, titulares y usuarios, de manera equilibrada.

Autores

- * Ex Asesor Legislativo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del Gobierno de Chile. Coautor del proyecto de reformas a la Ley de Propiedad Intelectual. Fundador de ONG Derechos Digitales. dalvarez@uchile.cl
- ** Abogada, Ex Asesora Legislativa del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, actual Asesora Legal del Departamento de Propiedad Intelectual de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Chile. mpaiva@direcon.cl

Notas

- 1 El texto consolidado de la Ley de Propiedad Intelectual vigente puede consultarse en <http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28933&buscar=17336> y el texto de la Ley N° 20.435 que reformó la Ley N° 19.336 sobre Propiedad Intelectual puede consultarse en <http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1012827&idParte=&idVersion=2010-05-04>

Prioridades para la definición de una agenda de articulación de políticas y programas MIPYMES en Centroamérica

Ricardo Matarrita*

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) representan en todos los países de la región más del 90% del parque empresarial, y son una parte muy importante del sector productivo para la generación de empleo y de mayores oportunidades para la población.

Su contribución a la producción es innegable, y los estudios más conservadores estiman que no menos de un 25 por ciento de la producción puede ser atribuida a este grupo de empresas. Los desafíos de las MIPYMES se han multiplicado en la última década por los cambios en el marco regulatorio global, profundización de cambios estructurales y la aparición de nuevos competidores. No obstante, la vinculación de las MIPYMES centroamericanas en los mercados internacionales es aún limitada y pese a que la política comercial ha estado caracterizada por la suscripción de múltiples acuerdos comerciales, el aprovechamiento de los potenciales beneficios dependerá del fortalecimiento de las capacidades competitivas de las empresas y de las acciones complementarias de apoyo que se realicen desde el sector público.

El contexto actual

En Centroamérica, la institucionalidad de apoyo a las MIPYMES ha mostrado una evolución importante en todos los países durante los últimos años, que se expresa tanto en la promulgación de legislación para el fomento de MIPYMES, como en la reorientación o relanzamiento de las actividades de esas instituciones.

En la actualidad, la institucionalidad centroamericana de fomento a la MIPYMES tiene una prioridad en la estructura de toma de decisiones, ya que en la mayoría de los casos se ha elevado al nivel de viceministerios, tal y como puede verse en el siguiente cuadro.

País	Ente responsable
Guatemala	Viceministro de Desarrollo de la MIPYME, que se encuentra dentro de la estructura del Ministerio de Economía.
Honduras	Viceministerio de la MIPYME, adscrito a la Secretaría de Industria y Comercio.
El Salvador	Comisión Nacional de la Micro y Pequeña empresa (CONAMYPE), que dependió inicialmente de la Vicepresidencia de la República y actualmente deriva del Ministerio de Economía.
Belice	BELTRAIDE
Nicaragua	Dirección de Fomento Empresarial del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio.
Costa Rica	Viceministerio de la Pymes dentro del Ministro de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica.
Panamá	Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Panamá, con rango de ministerio.

Adicionalmente, existe una estrecha coordinación de todas estas instituciones dentro del sistema de integración centroamericana, dado que CENPROMYPE, que es el Centro regional para la promoción de la pequeña y mediana empresa, tiene como consejo director a la máxima autoridad de estas instancias, de manera que se constituye en un foro permanente de coordinación y de intercambio de experiencias.

Otro hecho relevante que caracteriza a esta región es una acentuada tendencia hacia una institucionalidad de segundo piso. Esto significa que las instituciones de fomento de las MIPYMES se encargan de la definición de las políticas y de la coordinación junto con diferentes instituciones públicas, privadas y organismos no gubernamentales afines.

También destaca que en la segmentación de los beneficiarios de los programas, el enfoque de las instituciones, salvo excepciones, se ha concentrado en las micro y en las pequeñas empresas (MYPE), para lo cual, sin embargo, cada país tiene su propia definición.

No obstante, si bien el mandato de las instituciones abarca a las empresas de subsistencia así como a las empresas de exportación, generalmente se delegan los esfuerzos en las agencias nacionales de promoción de las exportaciones durante la etapa de la internacionalización, mientras que la atención de las empresas de subsistencia se realiza a través de programas nacionales desde la perspectiva del sector social.

Política de Fomento a las Pymes

Emprendimientos

Si bien en todos los países existe conciencia acerca de la necesidad de motivar la creación y el desarrollo de nuevas empresas, la visión de la política de fomento de las MIPYMES según esa perspectiva es incipiente. Ciertos elementos ya se encuentran presentes en algunos países pero es necesario impulsar que la política de promoción de las MIPYMES abarque las tres etapas del fomento de la iniciativa emprendedora: el desarrollo de una cultura emprendedora, la gestión de nuevos

emprendimientos y el fomento al crecimiento y la consolidación de los mismos.

Para el fortalecimiento de los nuevos emprendimientos y consolidación de la base empresarial existente, hay clara conciencia de que deben establecerse mecanismos de fomento diferenciados, que abarquen incentivos fiscales y financiamiento no tradicionales.

Para todo lo anterior es muy pertinente llevar a cabo acciones para impulsar la mejora regulatoria o simplificación de trámites y procedimientos como mecanismos que faciliten el establecimiento de nuevas empresas y la consolidación de las existentes reduciendo, entre otros, los costos de la formalización de empresas informales.

Respecto al tema de los emprendimientos, también es necesario avanzar en sistemas de coordinación interinstitucional, ya que por su naturaleza éstos involucran la participación de diversos sectores. También se requiere avanzar en los niveles de política pública, cultura emprendedora, y articulación entre las empresas.

Es claro entonces que hay una necesidad de ampliar la base de nuevos emprendimientos para de esta forma incrementar el número de empresas catalogadas como MIPYMES. Asimismo, paralelamente hay que desarrollar una consolidación de la base actual propiciando un ambiente de negocios que ubique a los mismos en estadios superiores de competitividad.

Financiamiento

En este tema es imprescindible la profundización del análisis sobre los sistemas de financiamiento para las MIPYMES y de acceso al crédito que actualmente tienen las MIPYMES. Esto con el propósito de identificar su efectividad, así como de los mecanismos no tradicionales de financiamiento, tales como las sociedades de garantías recíprocas, los fondos para el fomento de la innovación tecnológica u otros que permitan impulsar nuevos negocios o acelerar y consolidar los ya existentes.

Son requeridos nuevos instrumentos no tradicionales de financiamiento que no comprometan excesivamente el patrimonio de las empresas y reduzcan las elevadas tasas de mortalidad que caracterizan al sector. El apoyo real que pueda generar la banca de desarrollo es vital para el desarrollo de la base empresarial regional. El endeudamiento bancario y la debilidad de los instrumentos financieros tradicionales deben ser superados.

Articulación productiva

Con relación al desarrollo empresarial, es muy importante el fomento de la asociatividad y la articulación productiva (encadenamientos productivos), mediante el diseño y la aplicación de mecanismos que faciliten la articulación entre las empresas grandes y pequeñas, el apoyo a la innovación tecnológica y la interacción entre empresas grandes y las MIPYMES. Una dificultad que enfrentan las pequeñas y medianas empresas (PYMES) es la irregular oferta de servicios, por lo que resulta de interés desarrollar un proceso de certificación de consultores independientes que mediante la provisión de servicios de desarrollo empresarial a las mismas contribuyan al desarrollo de las capacidades gerenciales en esas empresas.

La articulación productiva debe ser entendida como la forma natural de complementar negocios. En el escenario competitivo coexisten diversos tipos de empresas y en muchas ocasiones las grandes empresas se constituyen en puntos de atracción para empresas más pequeñas, lo cual da paso a procesos catalizadores para el crecimiento de iniciativas empresariales más pequeñas.

Desarrollo territorial

El fomento a la generación de agencias de desarrollo territorial, mediante la participación de las autoridades y los grupos de interés económicos locales, se convierte en un instrumento valioso para la definición de los programas de fomento de las MIPYMES. De esta forma, se procura un desarrollo regional que vaya más allá de políticas sectoriales aisladas que únicamente estén en función de los mercados externos, y por lo tanto se busca que realmente contenga una visión articuladora del conjunto de la sociedad en lo local. En tal sentido, se busca promover el desarrollo de las MIPYMES en negocios inclusivos, fundamentalmente por su mayor dispersión geográfica, su contribución al empleo y a un mayor equilibrio en el desarrollo de las regiones.

En el caso centroamericano, el impulso a las MIPYMES desde la base territorial es una dinámica cada vez más presente. Ello ha permitido sumar los esfuerzos de las organizaciones locales de los territorios, generar mayor inclusión de actores marginados, así como aglomerar actividades y generar ventajas competitivas regionales.

Transferencia de conocimientos y necesidades de información

Centroamérica está ampliamente integrada, no obstante, la carencia de información se convierte en una oportunidad a la cual hay que darle solución tanto a nivel nacional como regional. Debido a las negociaciones que ha asumido la región centroamericana, como el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, (UE) o el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA), se ha planteado la necesidad de medir el impacto de las políticas implementadas y se ha puesto en evidencia la ausencia y disparidad de cifras disponibles con relación al sector MIPYME.

Uno de los elementos que caracterizó el proceso de la negociación CAFTA fue que hubo mucha incertidumbre y especulación sobre los potenciales efectos del acuerdo. La sensación de asimetrías en acceso a la información entre sectores y entre países fue notoria. Esta situación fue particularmente importante para las empresas más pequeñas porque en muchos casos desconocían totalmente los alcances del proceso.

En el inicio de la negociación del Acuerdo de Asociación con la UE la exigencia de actuar como bloque obligó a elevar los niveles de acceso a la información, y en el caso de las empresas más pequeñas sí se hicieron esfuerzos por parte del sector privado para salir de la transversalidad en la que generalmente se le ubicaba y ser tratado como un sector diferenciado. No obstante, pese a ese avance, no ha sido posible una medición certera de los impactos debido a las limitaciones de la información estadística disponible.

Hay coincidencia nacional y a nivel regional en Centroamérica sobre las limitaciones en la disponibilidad de información estadística acerca de la micros, pequeñas y medianas empresas. En primer lugar, existen diversas fuentes de información, con métodos de estimación, temporalidad y definiciones diferentes. Las fuentes de información provienen de estudios, encuestas y censos económicos. Derivado de esto, la información

resultante presenta diferentes sesgos y son fundamentalmente propensos a la exclusión de negocios informales.

En suma, el acervo de conocimientos de la región es amplio. Son muchas las experiencias y lecciones aprendidas, pero la interrupción política hace que ese conocimiento no se capitalice. Se requiere un esfuerzo permanente por la sistematización, análisis y difusión de buenas prácticas institucionales y programáticas en la región, así como la homologación de conceptos y metodologías para servicios de desarrollo empresarial y el establecimiento de mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de programas de fomento de las MIPYMES.

Reflexión final

Es evidente la importancia que los países de la región han estado otorgando al tema del fomento de la MIPYMES al darse conocerse las políticas, los planes y los programas que los diferentes países desarrollan, y más especialmente, las acciones de promulgación de nueva legislación y de remozamiento o relanzamiento de la institucionalidad existente. Todo ello tendiente a buscar formas de hacer más efectiva la política de fomento de las MIPYMES a la vez de garantizar su continuada evolución.

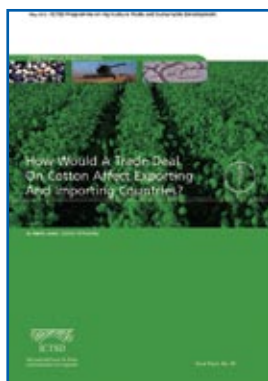
En cuanto a las prioridades para las decisiones de acción política, las instituciones a nivel regional coinciden en la necesidad de impulsar debates nacionales y regionales que promuevan el fortalecimiento de los marcos institucionales y legales para el desarrollo de la política de fomento de las MIPYMES.

Finalmente, es necesario revisar la legislación sobre MIPYMES existente en los diferentes países de la región con el propósito de identificar mejores prácticas, promover modificaciones, o bien elaborar propuestas de ley de fomento para las MIPYMES en aquellos países en la que ésta todavía no existe. En este ejercicio, por cierto, debe contemplarse la creación de marcos institucionales adecuados que promuevan la sensibilización y el debate regional sobre el tema.

Autor

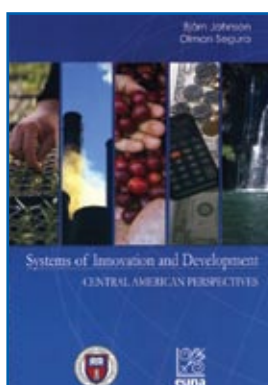
* Asesor Regional del Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica (Cenpromype).
ricardo.matarrita@gmail.com

Novedades



Ganadores y perdedores en un acuerdo OMC sobre comercio de algodón

Dentro de la serie de estudios que ICTSD ha lanzado sobre los efectos que ocasionarían eventuales acuerdos multilaterales en algunas materias primas, ahora es el turno al algodón. Mario Jales, investigador del Instituto de Estudios de Comercio y Negociaciones Internacionales de Brasil, evalúa los efectos que ocasionarían eventuales acuerdos multilaterales en el caso del algodón, tanto países exportadores como importadores de una decisión de esa naturaleza. El documento estima efectos en la producción y en el precio que serían consecuencias de una reforma multilateral a los aranceles y a los subsidios al algodón. Disponible en: <http://ictsd.org/i/publications/77906>



Systems of Innovation and Sustainable Development. Central American Perspectives. Björn Johnson y Olman Segura.

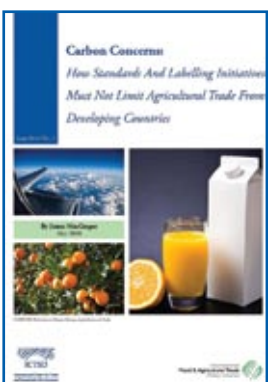
Este libro analiza el concepto de sistemas de innovación y su relación con el desarrollo económico. El vínculo entre instituciones e innovación, el papel del sector informal en el proceso de innovación, los cambios en las políticas del sector en los países en desarrollo y finalmente, el papel de las universidades en el mejoramiento del aprendizaje y la innovación en pequeños países latinoamericanos, son temas que se tratan en los diversos estudios del libro. Adicionalmente, se presenta una selección de análisis empíricos que utilizan diferentes aproximaciones al tema de los sistemas de innovación, permitiendo la discusión de sistemas de innovación de base geográfica y sistemas de innovación sectorial.



Libre comercio de medicinas. ¿Cuáles son los límites de la aplicación de la propiedad intelectual en frontera?

Propiedad intelectual vs. salud pública es la tensión histórica que ha contrapuesto a países en desarrollado y desarrollados en foros internacionales. A raíz de la confiscación de medicinas genéricas en Holanda durante el año pasado, el debate nuevamente se ha encendido, ocasionando incluso que Brasil e India recientemente solicitaran consultas ante la OMC. ¿Hasta dónde llega la protección de los derechos de propiedad intelectual, y dónde empieza la salvaguarda del bienestar colectivo y de la salud? Ésta, entre otras preguntas, son las que motivaron el estudio que Xavier Seuba, profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, realizó para ICTSD.

Disponible en: <http://ictsd.org/i/publications/74589>



Los estándares y las iniciativas de etiquetado no deben limitar el comercio agrícola de los países en desarrollo

El deseo de muchos países industrializados, principalmente de sus consumidores, de conocer de dónde provienen los productos que utilizan y el impacto ambiental que éstos ocasionan, ha conllevado a una proliferación de normas y requisitos de etiquetado a nivel internacional. Sin embargo, como defiende James MacGregor, autor de este estudio, esto no debe restringir el comercio proveniente de países en desarrollo, pues contrariamente a la creencia generalizada de que las importaciones de alimentos y bienes agrícolas generan una mayor huella ambiental, los países en desarrollo con frecuencia utilizan métodos menos intensivos en emisiones de carbono. Dicho argumento es además apoyado por el hecho de que estos países históricamente han contribuido muy poco a las emisiones globales (alrededor de un 15%), por lo que cuentan con el espacio ambiental para fomentar su desarrollo económico. Disponible en <http://ictsd.org/i/publications/77531>

Puentes

Calendario y Referencias

Eventos

Julio

- 7 La era de la productividad en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Washington, D.C. <http://events.iadb.org>
- Taller de Trabajo "Espacios de convergencia y de cooperación regional en América Latina". Santiago, Chile. <http://www.cepal.org>
- 8 Multilateralism Revisited Promoting Coherence in International Investment Rule-making through a Secondary Law Approach. Ginebra, Suiza, <http://ictsd.org/>
- 10 The International Climate Change Regime and Multilateral Trading Rules: A Latin American Perspective. Ginebra, Suiza. <http://ictsd.org/>
- 13 Carbon Financial Instruments – Challenges and Opportunities for Commercial Banks, Brokers, Asset Management firms, and Regional Stock Exchanges. Sao Paulo, Brasil. <http://events.iadb.org/>
- 21 - 22 Reunión de Ministros de Comercio del APEC. Singapur. <http://www.apec.org/>

Agosto

- 14-29 Second International Conference on Climate, Sustainability, and Development in Semi-arid Regions – ICID 2010. Fortaleza, Brasil. <http://icid18.org>
- 22-25 Advancing Sustainability in a Time of Crisis. Oldenburg-Bremen, Alemania. <http://www.isee2010.org/>

Septiembre

- 5-11 World Water Week 2010. Estocolmo, Suecia. <http://www.worldwaterweek.org/>
- 29 OMC: Órgano de Examen de las Políticas Comerciales - Estados Unidos. Ginebra, Suiza. <http://www.wto.org/>
- 24 UNCTAD Online Course "Legal Instruments of International Economic Relations and Regional Integration". Fecha límite para solicitar beca <http://www.ceddnet.org/survey>

Publicaciones

Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL (2010). Alianzas público-privadas para una nueva visión estratégica del desarrollo. Santiago.

Edwards, L. & Lawrence, R. (2010). Do Developed and Developing Countries Compete Head to Head in High Tech?. Washington, D.C.

Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO (2010). Food Outlook Report 2010. Roma.

Jales, M. (2010). How Would A Trade Deal On Cotton Affect Exporting And Importing Countries?. Ginebra: ICTSD

Lybbert, T. & Sumner, D. (2010). Agricultural Technologies for Climate Change Mitigation and Adaptation in Developing Countries: Policy Options for Innovation and Technology Diffusion. Ginebra: ICTSD.

Macgregor, J. (2010). Carbon Concerns: How Standards And Labelling Initiatives Must Not Limit Agricultural Trade From Developing Countries. Consultado el 5 de julio de 2010 en Ginebra: ICTSD.

Montemayor, P. (2010). Simulations On The Special Safeguard Mechanism. Ginebra: ICTSD.

Naciones Unidas (2010). El progreso de América Latina y el Caribe hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desafíos para lograrlos con igualdad. Nueva York.

Ordaz, J., Ramírez, D., Mora, J., Acosta, A. & Serna, B. (2010). Honduras: Efectos del cambio climático sobre la agricultura. Santiago: CEPAL.

Organización Mundial del Comercio, OMC (2010). Actualización del perfil de servicios de más de 90 economías. Ginebra.

Organización Mundial del Comercio, OMC (2010). Informe Anual 2010. Ginebra.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (2010). Los resultados de Copenhague: las negociaciones y el Acuerdo. Nueva York.

Ramírez, D., Ordaz, J., Mora, J., Acosta, A. & Serna, B. (2010). Guatemala: Efectos del cambio climático sobre la agricultura. Santiago: CEPAL.

Read, R. (2010). Trade, Economic Vulnerability, Resilience and the Implications of Climate Change in Small Island and Littoral Developing Economies. Ginebra: ICTSD.

United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD (2010). Promoting foreign Investment in Tourism. Ginebra.